UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE DERECHO

PROGRAMA DE DERECHO

**PROTECCION JURIDICA DE LA MUJER QUE
DENUNCIA VIOLENCIA EN EL AMBITO
FAMILIAR**

TESIS

Para optar el título profesional de: Abogado

AUTOR

Somocurcio Sologuren, Natalia Gema (0000-0002-5329-9048)

ASESOR

García Corrochano, Luis

Lima, mayo del 2018

DEDICATORIA

A mi madre, por su entrega, compromiso y paciencia. Por orientarme con amor, dedicarme palabras de aliento, confiar en mí y mantener el deseo de superación todos éstos años. Gracias por enseñarme la importancia de la investigación, ser mi soporte y motivación. A mi abuelita, porque con su exigencia y cariño ha sabido incentivar las ganas de crecer personal y profesionalmente.

AGRADECIMIENTO

A todas las mujeres víctimas de violencia que hicieron posible este trabajo de investigación, por transmitirme sus experiencias, revivir situaciones tan complicadas, darme a conocer sus miedos y esperanza de salir adelante. Considero que dar a conocer sus historias, permitirá continuar y mejorar la labor de defender sus derechos y brindarles la protección que realmente necesitan.

A mi asesor de tesis, el Doctor Luis García Corrochano, por su apoyo, orientación, motivación constante y profesionalismo. Gracias por brindarme los conocimientos necesarios, para culminar éste trabajo.

RESUMEN

Objetivo: Determinar la protección jurídica de parte del Estado a la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de medidas de protección en el distrito Tacna, enero - julio 2016. Estudio cuantitativo-cualitativo; descriptivo, retrospectivo, transversal. La muestra cuantitativa: 263 mujeres mayores de edad, víctimas de violencia, nivel de confiabilidad del 95%, muestreo probabilístico. Muestra cualitativa: se entrevista 20 mujeres víctimas de violencia. Resultados: La mujer víctima de violencia, no cuenta con una sólida red familiar de apoyo, no tiene un nivel de racionalidad para percibir que vive en una situación de riesgo grave; siente miedo a las agresiones, vergüenza; experimenta sentimiento de culpabilidad, justificando a su agresor. Asimismo, recibe las medidas de protección, pero en tiempos muy prolongados, existiendo riesgo inminente de ser violentadas nuevamente. Únicamente el 99,6% de las mujeres que realizan una denuncia, reciben las medidas por parte de los operadores correspondientes y el 15,7% en el tiempo adecuado (72 horas de efectuada la denuncia), el 79,3% restante, las reciben, pero en un periodo de hasta 30 días. Tipo de violencia: psicológica (38,2%); física (34,9%); física- psicológica (26,9 %). La ruta se inicia en la Comisaría de la zona donde vive, que deriva a medicina legal e informa del caso a fiscalía de familia. La respuesta de los organismos del Estado, no es la más adecuada; dificultades y barreras: falta de infraestructura, personal y capacitación del personal, para implementar la Ley N° 30364. El grado de articulación de las diversas instituciones, no es óptimo. Existe revictimización.

Palabras clave: Mujer víctima de violencia, medidas de protección, Estado, riesgo y agresiones.

ABSTRACT

Objective: Determine the legal division from the State, to the woman who denounces gender violence in the familiar scope, until obtaining protection measures in the district of Tacna, January - July 2016. Quantitative-qualitative study; descriptive, retrospective, transversal. Quantitative sample: 263 women of legal age, victims of violence, 95% level of reliability, probabilistic sampling. Results: A woman who is victim of violence, does not have a solid support from her family network, does not have a level of rationality to perceive that she lives in a situation of serious risk; feels fear of aggression, shame; she experiences feelings of guilt, justifying his aggressor. Likewise, she receives the measures of protection, but in very long times, existing an imminent risk of being violated again. Only 99.6% of women who make a complaint receive the measures by the corresponding operators and, 15.7% in the appropriate time (72 hours after the complaint was made), the 79.3% remaining receive it, but in a period up to 30 days. Type of violence: psychological (38.2%); physical (34.9%), physical-psychological (26.9%). The itinerary begins at the police station, of the area where he lives, which derives into legal medicine and reports the case to Family Prosecution Office. The response of the State's organizations is not the most appropriate; difficulties and barriers: lack of personal infrastructure and staff training to implement the Law No. 30364. The articulation degree of different institutions is not optimal. There is a revictimization.

Keywords: female victim of violence, protection measures, State, risk and aggressions.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO I.....	11
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	11
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	14
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	14
1.4. OBJETIVOS.....	16
Objetivo general	16
Objetivos específicos.....	16
CAPÍTULO II.....	18
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	18
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	18
2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES	18
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	21
2.4.1 POBLACIÓN	21
2.4.2 MUESTRA	21
2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN	22
2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.....	22
2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	22
2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	23
2.7. Procesamiento y Análisis	23
CAPÍTULO III	25
3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	25
3.1.1. Violencia.....	25
3.1.2. Violencia de Género	26
3.2. PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.....	28
3.2.1. Definición de violencia contra la mujer	28
3.2.2. Consecuencias de Violencia contra la mujer	30
3.2.3. ¿Cómo influye el machismo, considerando el mismo aspecto sociocultural, en la violencia?.....	32
3.2.4. Tipos de violencia.....	34
3.3. ANTECEDENTES	35
3.3.1. Internacional:.....	35
3.3.2. Nacional:.....	39

3.4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL.	46
3.4.1 Vinculación del Estado Peruano con los Tratados o Convenios Internacionales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y Marco Jurídico Nacional.....	46
CAPITULO IV	54
4.1. RESULTADOS	54
4.2. DISCUSIÓN.....	85
CAPÍTULO V	103
CONCLUSIONES.....	106
RECOMENDACIONES	108
ANEXOS.....	117

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Mujeres víctimas de violencia según lugar de denuncia Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	55
Tabla 2 Distribución de frecuencias según edad de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero - julio 2016.	56
Tabla 3 Distribución de frecuencias según periodicidad de la agresión de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	57
Tabla 4 Distribución de frecuencias según tipo de violencia de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	58
Tabla 5 Distribución de frecuencias según lugar de ocurrencia de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	59
Tabla 6 Distribución de frecuencias según motivo de la agresión de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	60
Tabla 7 Distribución de frecuencias según parentesco con el (la) agresor (a) de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	61
Tabla 8 Distribución de frecuencias según condición anímica del agresor de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	62
Tabla 9 Distribución de frecuencias según ocupación de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	63
Tabla 10 Distribución de frecuencias según ocupación del agresor de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.	64
Tabla 11 Mujeres víctimas de violencia según tipo de violencia denunciada, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.	65
Tabla 12 Mujeres víctimas de violencia según relación con el agresor, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.	66
Tabla 13 Mujeres víctimas de violencia según medidas de protección, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.	68
Tabla 14 Mujeres víctimas de violencia según medida cautelar, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.	69
Tabla 15 Mujeres víctimas de violencia, según días de demora para recibir medidas de protección, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.	70

Tabla 16 Mujeres víctimas de violencia, según remisión de caso a la Fiscalía, Tacna, enero – julio 2016.....	71
Tabla 17 Mujeres víctimas de violencia, según remisión de caso al Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.....	72

INTRODUCCIÓN

La violencia contra la mujer es un problema que genera gran preocupación a nivel nacional e internacional, por las altas cifras que ha alcanzado en los últimos años y por los daños que causa a la mujer y su entorno familiar, afectando su salud física y mental.

El marco normativo internacional reconoce la violencia contra la mujer como un tipo de discriminación en la Recomendación N°19 de la CEDAW (1992). Posteriormente se adopta la Convención Belém do Para (1994) y se desarrolla éste tema de manera específica. En el marco normativo nacional se promulgó la Ley N° 26260 sobre Violencia Familiar, derogada después de 22 años por la Ley N° 30364, normativa vigente.

La violencia contra la mujer dejó de ser un tema que deba resolverse únicamente en el ámbito privado de la familia, para ser de interés público, siendo necesario el trabajo multidisciplinario de diferentes instituciones.

Se conoce que, en países como México, Cuba y Brasil, los casos de violencia contra la mujer son elevados y esto se ve favorecido por índices de pobreza; desempleo, lo que genera dependencia económica por parte de la mujer y su sometimiento al hombre, quien ejerce el poder y control; la indiferencia del Estado y la inacción de los operadores de justicia, lo mencionado evidenciado en casos emblemáticos como el de Maria da Penha en Brasil.

La Ley N° 30364 ha generado grandes cambios y es necesario evaluar los mismos, para saber la eficiencia con la que actúan los encargados de impartir justicia. Por tal motivo, y teniendo en cuenta los riesgos que corre una mujer víctima de violencia, la vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, se hace necesario realizar un estudio en el Distrito de Tacna, para determinar la frecuencia y las consecuencias que ésta genera en mujeres mayores de edad que presentaron su denuncia ante la Policía Nacional, durante el periodo enero – julio 2016.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La violencia contra la mujer es un fenómeno social que vulnera los derechos y libertades fundamentales del ser humano y no permite a la mujer su desenvolvimiento dentro de la sociedad, quebranta su dignidad humana, viola la igualdad y perturba el desarrollo y la paz, es decir, es una transgresión total de los derechos. La víctima de violencia no está ejerciendo sus derechos fundamentales, los que están reconocidos por la Declaración universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú, derechos como el respeto a su vida, su integridad física y moral, derecho a la igualdad, protección ante la ley, al respeto a su dignidad, a no ser víctima de tortura, entre otros.

La violencia contra las mujeres es una expresión de las relaciones marcadas por desigualdades de poder que impactan en la sociedad, hecho que se ha ido dando a lo largo de la historia, afectando de manera sistemática a las mujeres, entre ellas niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.

Es preciso mencionar que, en la actualidad, la violencia contra la mujer ha sido visibilizada en la comunidad internacional, la cual ha comprometido a los Estados a actuar frente a ella; y una herramienta para actuar frente a ella, sin duda alguna, es a través de las leyes. Es por esta razón que los Estados se han visto en la necesidad de generar normativa que, básicamente, busque punir a los agresores. Normativa que debe ir de la mano con la promulgación de políticas y mecanismos para el cumplimiento de la ley, personal capacitado y la colaboración de las agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer.

El Estado tiene el deber de prevenir actos de violencia contra la mujer, investigarlos cuando ocurran, enjuiciar y castigar a los agresores, así como de ofrecer reparación, socorro y cuidado a las víctimas.

Sobre las causas de la violencia contra la mujer, podemos decir que estas son múltiples y, del mismo modo lo son sus efectos, ya que perjudican no solo a la mujer, sino también a la familia y la sociedad. La violencia se presenta en diferentes ámbitos como el laboral, familiar, social, político, etc., y promueve desigualdades entre hombres y mujeres. En este punto, es preciso hacer hincapié en que hombres y mujeres somos diferentes y no sólo porque tengamos cuerpos diferentes sino también porque a esos cuerpos se le añaden modos subjetivos y culturales en cada sociedad y en cada época. El origen de la desigualdad entre mujeres y hombres no está en la diferencia sexual entre unas y otros sino en el injusto uso que de esa diferencia hace una cultura machista que, sin duda, prima en nuestra sociedad.

En el Perú, la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, señala en su artículo 1° que su objeto es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Asimismo, esta ley considera mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección, reparación del daño causado; persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados.

Lo mencionado evidencia los grandes avances de la Ley N° 30364, siendo uno de ellos el reconocimiento de la violencia contra la mujer por razones de género, lo que denota la intención del Estado de adecuarse a los convenios internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém do Pará. y su obligación frente a las mujeres víctimas de violencia, a las que se les reconoce sus derechos de manera explícita (artículo 10).

Por otro lado, la nueva ley reconoce cuatro tipos de violencia: física, psicológica, económica y sexual; del mismo modo, añade que la violencia contra la mujer no se da únicamente en el ámbito familiar, sino que la misma puede desarrollarse en el ámbito laboral y de estudios, por lo que reconoce los derechos de la mujer en ambos campos (artículo 11 y 12, respectivamente).

Una mujer que es víctima de violencia, requiere protección por parte del Estado, por lo que es necesaria la emisión de medidas de protección; sin embargo, en la ley anterior, Ley N° 26260 – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, el tema procesal se dilataba, pues los fiscales de familia derivaban el tema a los fiscales penales, quienes, a su vez, solicitaban la emisión de éstas medidas al juzgado. Con la nueva Ley, existe un gran cambio al respecto, ya que, una vez realizada la denuncia, es deber de la Policía Nacional presentar un informe al Juzgado de Familia o Mixto en un plazo de 24 horas y es obligación de éste juzgado otorgar las medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, garantizando el bienestar de la víctima. Se puede considerar este cambio el más importante, pues de acuerdo a los plazos establecidos, se debería dar atención inmediata de los casos de violencia, dando cumplimiento a la etapa de protección que prevé la norma en un proceso especial y realmente rápido.

Si bien los cambios de la ley son positivos, es importante recalcar que éstos deben ser efectivos en la práctica, pues al momento de ejecución aún existen falencias, dándose únicamente cumplimiento parcial a lo establecido en la ley. Por tal motivo, la tutela judicial debe ser orientada a la tutela de prevención a través la emisión de medidas de protección eficaces y bajo seguimiento.

Por lo mencionado, podemos afirmar que no basta dar una ley, se debe garantizar que los operadores de las diferentes instituciones que van a impartir justicia, tengan claras sus funciones y las cumplan de acuerdo a la ley y su reglamento. Asimismo, hace falta que las mujeres maltratadas conozcan la ruta a seguir para denunciar un acto de agresión y que confíen en que podrán acceder a la justicia que merecen.

Este estudio pretende analizar el contexto actual en el que el Estado peruano está asumiendo responsabilidades contraídas con las mujeres, la familia y la sociedad para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, desde la denuncia de la mujer víctima de violencia hasta la obtención de medidas de protección. En este sentido, el problema de investigación se formula de la siguiente manera:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Existe protección jurídica suficiente y adecuada de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de las medidas de protección?

Problemas específicos

¿Cuál es el perfil socio demográfico de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, del distrito Tacna?

¿Cuál es el tipo de violencia que denuncia la mujer en el ámbito familiar, en el distrito Tacna?

¿Cuál es la ruta que adopta la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna?

¿Cuál es la respuesta de parte de los organismos del Estado frente a las quejas presentadas por parte de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna?

¿Cuáles son las principales barreras que los operadores de justicia tienen para cumplir con el propósito jurídico de auxilio de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de las medidas de protección, en el distrito Tacna?

¿Existe articulación de las diversas instituciones que brindan protección a la mujer maltratada, en el distrito de Tacna?

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La violencia contra la mujer es un problema actual y sin duda, es una forma de discriminación y violación de los derechos humanos, que tiene efectos negativos en la mujer, familia y sociedad.

Los últimos casos de violencia contra la mujer y feminicidio han encendido las alarmas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Estado peruano en general.

Las mujeres sufren a menudo todo tipo de violencia (física, psicológica, sexual, etc.) y añadido a esto, existe el sentimiento de culpa, miedo y vergüenza de poder realizar la denuncia respectiva por las agresiones cometidas en su contra.

Sin duda alguna, las consecuencias de ser mujer en una sociedad machista como la actual, impide el libre desarrollo y desenvolvimiento de la misma. El temor se apodera de ellas al pertenecer a un grupo menospreciado y a un sexo oprimido, volviéndose, de manera involuntaria, protagonistas de innumerables muertes en nuestro país. Lo dicho se verifica con los índices de violencia en los últimos años, tal como lo mencionó la ex Ministra Ana María Romero-Lozada, quien estuvo en la ciudad de Tacna a fines de mayo del 2017, dando cifras alarmantes sobre violencia contra la mujer, la que se duplicó en un año. Afirmando que el 2015 se registraron dos casos de feminicidio y tres tentativas de ese delito, mientras que, en el 2016, la cifra se duplicó, alcanzando un total de cuatro feminicidios y seis tentativas. Resaltó además que, en el Perú, hubo 125 feminicidios y 258 intentos de asesinato en el mismo año¹. Asimismo, los datos del Instituto Nacional de Estadística Informática, según la violencia ejercida por el esposo o compañero en la ciudad de Tacna los años 2011, 2012, 2013 y 2014 fue de 13.9%, 13.6%, 9.1%, 10.8%, respectivamente.

Los efectos de la violencia no se limitan a la mujer, sino que se extienden a toda su familia, sobre todo a su entorno cercano como hijos y padres, existiendo cambios notables en su conducta y evidenciando daño psicológico, perjudicando su salud, convirtiéndose en un tema que escapa de la esfera privada.

Urgen cambios a nivel social y político. Social, para erradicar una cultura en la que el poder lo tiene el hombre y optar por nuevas formas de vida, y político, porque a través de nuevas leyes, más efectivas, podrán dar pena o sancionar como corresponde a los agresores; sin embargo, debemos tener presente que no basta con tener nuevas leyes como la Ley N°30364, sino que éstas deben ir de la mano de un grupo multidisciplinario que conozca del tema, esté preparado y trabaje en pro de la mujer y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.

¹ Tomado de: Diario Perú 21, 27 de mayo del 2017. Pp. 13

1.4. OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar si existe protección jurídica suficiente y adecuada de parte del Estado a la mujer víctima de violencia, en el distrito Tacna.

Objetivos específicos

Identificar el perfil socio demográfico de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, del distrito Tacna.

Identificar el tipo de violencia que denuncia la mujer en el ámbito familiar, en el distrito Tacna.

Identificar la ruta que adopta la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna.

Examinar la respuesta de parte de los organismos del estado frente a las quejas presentadas por parte de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna.

Identificar las principales barreras que los operadores de justicia tienen para cumplir con el propósito jurídico de auxilio de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, hasta la obtención de las medidas de protección, en el distrito Tacna.

Identificar si existe articulación de las diversas instituciones que brindan protección a la mujer maltratada, en el distrito de Tacna.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa; descriptiva, retrospectiva, de corte transversal.

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación fue descriptivo.

2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES

Datos cuantitativos:

Variables	Dimensiones	Indicadores	Escala
	Edad	Años	Razón
	Ocupación.	Profesional Comerciante Casa Estudiante Informal Técnica Otros	Nominal
	Lugar de denuncia	Comis. G. Albarracín Comis. Alto de la Alianza Comis. Vigil Comis. Central Comis. Mujeres Comis. Pocollay	Nominal

Perfil socio Demográfico		Comis. La Natividad Comis. Ciudad Nueva Comis. A.B. Leguía Otras	
	Periodicidad de la agresión	Primera vez Segunda vez Otro	Ordinal
	Lugar de ocurrencia	Domicilio Centro de trabajo Calle Otro	Nominal
	Motivo de la agresión	Conyugal Familiar Incompatibilidad de carácter Económico Alcoholismo Salud Irresponsabilidad Otros	Nominal
	Parentesco con el agresor	Conviviente Esposo Ex. Conviviente Ex- esposo Padrastro Hijo Otros	Nominal
	Condición anímica del agresor	Ecuánime Ebrio Alterado Otros	Nominal
		Comerciante	

	Ocupación del agresor	Técnico Informal Profesional Otros	Nominal
Violencia	Tipo de violencia	Física Psicológica Sexual Otros	Nominal
Respuesta de los organismos del estado frente a las denuncias	Medidas de protección	Si No	Nominal
	Medidas cautelares	Si No	Nominal
	Días de demora	1-3 días (72 horas) 4 a 30 días 31 a 60 días 61 a 120 días 121 a 180 días 181 a 240 días	Ordinal
	Remisión de casos a fiscalía	Si No	Nominal
	Remisión de casos a Poder judicial	Si No	Nominal

Fuente : Elaboración Propia

Datos cualitativos;

VARIABLES	DIMENSIONES
Mujer víctima de violencia	Ruta que adopta la mujer víctima de violencia

	Soporte social frente a la violencia de pareja.
	Búsqueda de protección del estado frente a la violencia de pareja.
Operadores de justicia	Barreras que los operadores de justicia tienen para cumplir con el propósito jurídico de auxilio a la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar
	Conocimientos que manejan los operadores de justicia sobre el tema de violencia intrafamiliar
	Acciones realizadas por los operadores de justicia frente a una denuncia de maltrato de una mujer contra su pareja.

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

2.4.1 POBLACIÓN

Conformada por mujeres mayores de edad, víctimas de violencia que presentaron su denuncia en la PNP del distrito de Tacna, que representa a 835 mujeres.

2.4.2 MUESTRA

Cuantitativa: para la determinación de la muestra de estudio, se decidió trabajar con un nivel de Confiabilidad del 95%. Obteniéndose una muestra de 263 mujeres mayores de

edad, víctimas de violencia seleccionadas mediante un muestreo *probabilístico*. El tamaño de la muestra fue determinado usando la fórmula para una población finita:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z^2 * p * q}$$

N	=	835	Poblacion o universo
Z	=	1.96	Nivel de confianza
p	=	0.5	Probabilidad a favor
q	=	0.5	Probabilidad en contra
d	=	0.05	error muestral

n = 263

Cualitativa: Se entrevistó a 11 mujeres víctimas de violencia que presentaron su denuncia en la PNP distrito Tacna, que accedieron voluntariamente a la entrevista.

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Mujeres víctimas de violencia, mayores de edad, que hayan presentado denuncias en la Policía Nacional.

Mujeres víctimas de violencia que se encuentren en el distrito de Tacna.

Mujeres víctimas de violencia que hayan seguido procesos en el periodo de enero a julio del 2016.

2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Mujeres víctimas de violencia, menores de edad.

Mujeres que no hayan iniciado procesos en el periodo de enero a julio del 2016.

Mujeres que no presentaron denuncia.

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Para los datos **cuantitativos**, se utilizó una ficha de registro, cuyos casos fueron seleccionados al azar, de los expedientes publicados en la página oficial de búsquedas del Poder Judicial, “Centro de Expedientes Judiciales”: <http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html>, dentro del periodo definido para la presente investigación (enero-julio del 2016).

Para los datos **cualitativos** se utilizó:

- Guía de entrevista a víctimas de violencia familiar (Ver anexo 3), para las entrevistas a profundidad a mujeres víctimas de violencia, diligenciada en Juzgados, Fiscalía, Poder Judicial, Centro Emergencia Mujer, DEMUNA, Albergue “Domitila las Combes”. Para cada entrevista, se solicitó el consentimiento informado para la libre participación en la investigación, se brindó el máximo cuidado y tiempo necesario para garantizar que la información recopilada tenga un carácter anónimo y confidencial. Cada entrevista tuvo una duración promedio de 60 minutos.
- Guía de entrevista a operadores de justicia/organismos del estado (Ver anexo 2), para las entrevistas a profundidad a operadores de justicia, diligenciada en Juzgados, Fiscalía, Poder Judicial, Centro Emergencia Mujer, DEMUNA. Asimismo, se solicitó el consentimiento informado para la participación de la investigación, la entrevista tuvo una duración aproximada de 60 minutos como promedio.

2.7. Procesamiento y Análisis

- A. **Para los datos cuantitativos**, se diseñó una base de datos en Excel 2013; el procesamiento, tabulación, elaboración de tablas simples y gráficos a través del programa SPSS versión 15.0. Se utilizó la estadística descriptiva como: frecuencia y porcentaje.

B. **Para los datos cualitativos**, los testimonios obtenidos a través de las entrevistas a profundidad, se procesaron a través de la interpretación de textos.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1.1. Violencia

Guillermo Cabanellas define violencia como “situación o estado contrario a la naturaleza, modo o índole” en la que se necesita el “empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento”; asimismo, lo considera “todo acto contra justicia y razón”².

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra violencia tiene cuatro significados: cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta contra el natural modo de proceder y acción de violar a una mujer. Éstos significados que nos da la RAE, nos permite afirmar que, para actuar con violencia, se hace uso de la fuerza y al emplear la misma, se actúa contra la voluntad de alguien.

Hanna Arendt (2005), citada por Francisco Jiménez-Bautista (2011:15), señala que la violencia es la expresión más contundente del poder y se enraíza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, esto es, en los principios más antiguos que fundaron nuestro pensamiento.

Para la Organización Mundial de la Salud - OMS, la violencia es “el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias, probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte”³. Por esta razón, es de suma importancia, considerar su definición, ya que abarca un campo mucho más amplio, considerando no sólo actos físicos sino también amenazas e intimidaciones.

² Cfr. Cabanellas, Guillermo 2013: 467.

³ Cfr. Organización Mundial de la Salud. “Informe Mundial sobre la violencia y la salud” 2002: 3.

3.1.2. Violencia de Género

El reconocimiento de los derechos humanos se da desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es en 1979 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dicho instrumento internacional reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, considerando la discriminación una clara vulneración de derechos humanos; sin embargo, no existe una definición clara de violencia de género, lo que dificultó la aplicación de la norma para sancionar y buscar soluciones a un problema que iba en ascenso. En 1992, en la Recomendación N° 19 del Comité de la CEDAW se señala que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe a la misma de gozar de derechos y libertades en igual condición que el hombre. Posteriormente, en 1994, en el XXIV periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se adopta la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Belém do Pará, siendo la primera convención en mencionar la violencia contra la mujer, con un enfoque de género.

La violencia de género, como es de conocimiento, es aquella que atenta contra la mujer. Sin embargo, es preciso definir el concepto de género para entender de manera clara esta forma de violencia.

La OMS señala que “género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos”⁴.

De ese modo, podemos afirmar que el análisis sociológico es importante, ya que se podrán analizar los comportamientos del hombre y la mujer desde el inicio de sus vidas. Iyamira Hernández señala que “para analizar los comportamientos violentos, no podemos obviar el análisis de la formación de identidad de mujeres y hombres ni dejar de evaluar cómo históricamente su situación vital ha estado relacionada de manera íntima con la

⁴ Cfr. OMS. “Temas de Salud: Género”. Consulta en: <http://www.who.int/topics/gender/es/>

significación social de los roles de género, deberes y prohibiciones normadas por la sociedad y en la especialización vital mediante la sexualidad⁵”.

Teniendo el concepto de género, podemos decir que este no hace referencia al hombre y la mujer, sino a las cualidades, comportamientos, características y responsabilidades que la sociedad atribuye a los mismos. Si bien, nacemos con un sexo, en el transcurso de la vida, aprendemos a ser hombres y mujeres.

Por otro lado, la violencia de género representa el mecanismo de sometimiento por excelencia en el sistema patriarcal. Se convierte en el instrumento de dominación y control que perpetua el mantenimiento tanto del poder masculino como del sometimiento femenino, siendo el control de la sexualidad femenina un elemento muy relevante en el ejercicio de esta violencia⁶.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belém Do Pará, la define en su artículo 1:

“Se entenderá como violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), la define como “aquella violencia basada en el sexo y dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de libertad, ya ocurran en la vida pública o en la vida privada”.

Nélida Pinto explica: “La violencia por motivos de género en diversas formas, inclusive la violación sexual, la violencia doméstica, los asesinatos, delincuencia y el tráfico de mujeres, tiene un enorme costo en cuanto a la salud mental y física”⁷.

De acuerdo a lo mencionado, podemos concluir que la violencia de género es aquella dirigida en contra de las mujeres por ser consideradas subordinadas a los hombres, con

⁵ Cfr. Hernández, Iyamira 2014:16

⁶ Cfr. Revista de estudios de juventud. “Juventud y violencia de género” 2009: 7.

⁷ Cfr. Pinto, Nélida 2006: 9.

menos derechos y libertades que éstos. La violencia de género afianza la relación desigual entre hombres y mujeres y nos sitúa en una sociedad patriarcal.

3.2. PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

3.2.1. Definición de violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer es un problema que ha estado presente a lo largo de la historia, sin embargo, ha sido reconocida en la esfera internacional, hace casi cuatro décadas, como un problema social.

Y, es desde el reconocimiento internacional que nuestro país promulga la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar en 1993, para, posteriormente, ser derogada por la entrada en vigencia de la Ley N° 30364, promulgada el 23 de noviembre del 2015 y su Reglamento, el 27 de julio del 2016.

De ese modo, se dio un gran avance en la normativa nacional, pues antes se consideraba violencia familiar a todos los actos cometidos sólo por personas vinculadas familiarmente con la agraviada; con la nueva ley, se sanciona la violencia contra la mujer por razones de género y se toma en cuenta la definición de violencia empleada por la Convención Interamericana, para prevenir, erradicar y sancionar la Violencia contra la Mujer – Belém do Pará.

La violencia contra la mujer es un tema de preocupación mundial y actualmente es una pandemia mundial que restringe a las mujeres, vulnera su salud y atenta contra sus vidas medrando el desarrollo de una sociedad inclusiva y democrática⁸.

Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas afirma que: "La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz"⁹.

⁸ Cfr. Flora Tristán y Amnistía Internacional. "La violencia contra la mujer: El feminicidio en el Perú" 2005: 22.

⁹ Cfr. "Kofi Annan califica la violencia a la mujer como la más vergonzosa en una videoconferencia ofrecida en Alicante". Diario El País: 1999.

Asimismo, en el artículo “Violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú” se afirma que: “la violencia contra la mujer constituye la punta del iceberg de la injusticia y de la desigualdad en las que viven aún hoy, en este siglo XXI iniciado, tantas y tantas mujeres en el mundo”¹⁰.

Juan Trelles señala que “La violencia contra la mujer ocurre a través de todo su ciclo de vida: prenatal (abortos selectivos según el sexo, efectos sobre el recién nacido de la violencia durante el embarazo); infancia (infanticidio femenino, abuso físico, sexual y psicológico); niñez (matrimonio infantil, mutilación genital femenina, abuso físico, sexual y psicológico; incesto; prostitución infantil y pornografía); adolescencia y vida adulta (violencia durante el cortejo y el noviazgo, sexo forzado por razones económicas, incesto, abuso sexual en el sitio de trabajo, violaciones, acosamiento sexual, prostitución y pornografía forzada, tráfico de mujeres, violencia conyugal, violación marital, abuso y homicidio, homicidio conyugal, abuso psicológico, abuso de mujeres discapacitadas, embarazos forzados) y vejez (‘suicidio’ forzado u homicidio de viudas por razones económicas, abuso físico, sexual y psicológico)”¹¹.

A su vez, en la investigación “Depresión y ansiedad en mujeres en situación de maltrato en la relación de pareja según tipo de convivencia, en zonas urbano-marginales de la ciudad de Lima” se explica que: “La violencia contra la mujer en el hogar representa un grave problema social. Se trata de un fenómeno frecuente que produce consecuencias muy graves en las víctimas y en los familiares; el hogar, que podría ser un ambiente de compañía mutua, de afecto y realización personal para las parejas, se convierte en un ambiente de riesgo para la víctima, en este caso de las mujeres en situación de maltrato”¹².

La violencia contra las mujeres afecta a las mujeres en todas partes. Impacta en la salud de las mujeres, dificulta su capacidad para participar plenamente en la sociedad, afecta el disfrute de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos, y es una fuente de tremendo sufrimiento físico y psicológico para las mujeres y sus familias¹³.

¹⁰ Cfr. Lomas, Carlos 2008: 14.

¹¹ Cfr. Trelles, Juan. “Violencia basada en género” 2015: 1.

¹² Cfr. Huerta, Rosa y otros 2014: 125.

¹³ Cfr. Naciones Unidas. “Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos” 2013: 1.

En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención Belem do Pará”, señala en su artículo 1 que para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia contra las mujeres es un escándalo ético y un escándalo democrático, es una expresión de las relaciones marcadas por desigualdades de poder que impactan en la sociedad¹⁴.

Sin duda, la violencia contra la mujer es un problema social que vive nuestro país, vulnera derechos, limita a la mujer y es causada por el control que busca ejercer un hombre sobre una mujer. Los índices de mujeres víctimas de violencia ha incrementado los últimos años, por lo que ya no es un tema invisible. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres viven diversas formas de violencia por parte de su pareja, en la mayoría de casos, desde insultos hasta agresiones físicas y esto, a consecuencia de vivir en una sociedad donde impera el machismo y que es tan permisiva, teniendo el hombre “derecho” a controlar la vida de la mujer y mostrando su poder y superioridad.

3.2.2. Consecuencias de Violencia contra la mujer

Nélida Pinto, en su artículo “Repercusiones de la violencia basada en género sobre la salud de las mujeres” señala que la violencia contra la mujer tiene consecuencias que afectan la salud física, psicológicas y de impacto social.

De acuerdo a la salud física, Nélida Pinto afirma que las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales (lesiones, golpes, moretones) y ser mortales (homicidio, suicidio). La mayoría de mujeres maltratadas son más propensas a tener problemas de salud y esto debido a la inmunidad reducida por el estrés que provoca el maltrato.

Por otro lado, las consecuencias psicológicas pueden conducir a la mujer al suicidio, ocasionado por el agotamiento emocional y físico y como el medio idóneo para escapar

¹⁴ Cfr. Neria, Yéssica. “La Violencia contra la mujer y la Responsabilidad del Estado” 2016: 2.

del círculo de violencia. Pinto señala que muchas mujeres maltratadas están deprimidas, ansiosas o con trastorno de estrés postraumático.

Finalmente están las consecuencias que tienen impacto social, referidas principalmente a los costos en los que incurre la víctima de violencia, para tratar heridas o lesiones y lo relacionado a su productividad y empleo, ya que una mujer violentada no puede brindar un aporte sustancial a la sociedad, por lo que sus remuneraciones se ven reducidas.

La violencia, en cualquiera de sus formas, tiene un gran impacto en la salud de las mujeres, produciendo consecuencias inmediatas o aumentando las probabilidades de enfermedades futuras. En ese sentido, podemos afirmar que existe un vínculo entre violencia y salud, es decir, una situación de violencia generará la vulneración de este derecho fundamental.

Por lo mencionado, se deduce que la violencia contra la mujer tiene como consecuencia la restricción de sus derechos fundamentales, los mismos que están establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Política:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)

22. A la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo, el artículo 7 de la normativa en mención señala:

Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa (...).

La violencia contra la mujer tiene consecuencias de largo alcance tanto para ella como para sus hijos y la sociedad en su conjunto. La mujer que es objeto de violencia padece muy distintos problemas de salud y disminuye su capacidad para obtener ingresos y

participar en la vida pública. Sus hijos corren muchos más riesgos de tener problemas de salud, bajo rendimiento escolar y trastornos de la conducta¹⁵.

En la mayoría de casos, las secuelas que vive una mujer víctima de violencia impiden su desenvolvimiento y la limita en diversos aspectos. La mujer que ha experimentado cualquier tipo de violencia, sufre un gran deterioro en su salud física y/o mental, pues su día a día transcurre entre el miedo, estrés y tensión. Vivir en un entorno hostil, genera problemas emocionales que, posteriormente pueden desencadenar conductas que la perjudiquen y llevarlas hasta el suicidio.

3.2.3. ¿Cómo influye el machismo, considerando el mismo aspecto sociocultural, en la violencia?

El machismo es difícil de definir, pero casi todos lo reconocemos. Las mujeres, sobre todo, lo experimentan en muchas ocasiones, aunque a veces creen que se trata de un problema personal de sus parejas, colegas o jefes. Tratan de justificarlos: “es un poco brusco”, “es muy exigente” o bien, “tiene carácter muy fuerte”. Con frecuencia, apelan a teorías psicológicas para explicarse las conductas de los hombres: “es que tuvo un papá muy distante”, “su mamá fue muy dura con él y por eso desconfía de las mujeres”, o “tiene problemas de comunicación”. Y a veces concluyen, con una mezcla de humor y resignación: “es que así son los hombres”¹⁶.

Las mujeres no sienten la necesidad de demostrar que son muy mujeres, los hombres tienen que demostrar en todo momento y en todo lugar que son muy hombres. En esa necesidad, en ese esfuerzo extra, radica lo que llamamos machismo. (Castañeda 2013:9)

Giraldo (1972) define el machismo, a través de sus características. Resalta, entre ellas, su heterosexualidad y su agresividad. Resulta importante para el “macho” demostrar su capacidad de conquista y alardear la misma. Por otro lado, destaca la importancia de dejar en evidencia su capacidad de tener descendencia, criar, educar y sostener una familia y menciona la importancia del embarazo de la mujer y la presencia de hijos, como una manera de tener a la mujer más segura en casa.

¹⁵ Cfr. Naciones Unidas. “Poner fin a la violencia contra la mujer” 2007:5.

¹⁶ Cfr. Castañeda, Marina 2007: 25.

Se trata de engañar y conquistar a varias mujeres, pero proteger a las de la familia, creyendo que ellas sí deben llegar vírgenes al matrimonio, éste y una serie de estereotipos son parte de nuestra cultura, pues vivimos en una sociedad donde únicamente los hombres son sexualmente libres.

La relación que tiene el hombre con la mujer, es de dueño, mostrando su superioridad y el control que logra ejercer.

Siguiendo la línea de Giraldo, un verdadero macho no puede tolerar que su mujer le pegue o no le obedezca, menos aún que lo desautorice delante de los demás y en caso lo haga, él debe pegarle. Ejercer su rol de hombre, lo autoriza a no darle ningún tipo de libertad a su mujer, quien debe desarrollar un papel sumiso y de obediencia.

Por otro lado, Giraldo nos explica que los celos y la agresividad de un hombre, pueden explicar el fenómeno de agredir física y verbalmente a una mujer, hasta cometer un homicidio. Sin duda, nuestra sociedad ha adoptado determinados patrones que toleran la violencia contra la mujer, la justifican, comprenden y consideran “normal”.

El mundo privado de la familia parece ser uno de los lugares idóneos para la expresión de la agresividad, que las frustraciones personales o cualquier otra causa generadora de ira provoca en el hombre, expresión que se manifiesta habitualmente sobre aquellos objetos considerados socialmente, desde una perspectiva tradicional, como legítimos y propios: la mujer y los hijos. Ahí rigen normas de permisividad y tolerancia sobre conductas que en el mundo exterior son reprimidas. Esta situación, en la actualidad, está mantenida por la ideología patriarcal que subyace en nuestra sociedad y cuya idea predominante gira alrededor de la suposición básica de la inferioridad de la mujer y de la superioridad del varón, lo que lleva a plantear una diferencia jerárquica y aquí, el varón se instala en el nivel superior y, desde allí, detenta el poder, ejerce el control y perpetúa un orden que contribuye a consolidar la opresión de la mujer. Esta ideología promueve una división sexual del trabajo, así los hombres son asignados a la producción y al ámbito público, mientras que las mujeres lo son a la reproducción y al ámbito doméstico. Esta jerarquización se expresa, en todas las áreas del funcionamiento social, bajo la forma de opresión a la mujer: sexual, económica, intelectual, política, religiosa, psicológica, afectiva que es mantenida por patrones culturales. (Huerta 2014:126)

En la actualidad, podemos observar que existe ausencia y/o negación de los derechos de la mujer, al no recibir un trato igualitario, pues las tareas familiares siguen siendo asignadas a mujeres, en la mayoría de casos. Y al no desenvolverse profesionalmente y estar únicamente en casa, el hombre considera tener control sobre ella, sometiéndola, olvidando que se trata de seres humanos, sujetos de derechos. Frases como “a mí me haces caso, porque yo soy el hombre” o “esas cosas sólo deben hacerlas las mujeres, porque pare eso están”, que escuchamos a diario, son una muestra que el machismo existe en el ámbito familiar peruano y es, indiscutiblemente, un factor de la violencia de género.

3.2.4. Tipos de violencia

La Ley 30364, señala que los tipos de violencia contra las mujeres y los grupos integrantes del grupo familiar:

- a. **Violencia física:** Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye al maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que requiere para su recuperación.
- b. **Violencia psicológica:** Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.
- c. **Violencia sexual:** Son acciones de naturaleza sexual que se comenten contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
- d. **Violencia económica o patrimonial:** Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona.

Los tipos de violencia física por motivos de género de los cuales son víctimas las mujeres comprenden desde bofetadas, puñetazos, estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e incluso el homicidio¹⁷.

Por otro lado, la violencia sexual comprende una gran diversidad de actos, como las relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados, el acoso sexual,

¹⁷ Cfr. Flora Tristán y Amnistía Internacional. “La violencia contra la mujer: El feminicidio en el Perú” 2005: 11.

los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad¹⁸.

La violencia psicológica o emocional, consiste en las amenazas, los comentarios degradantes, el lenguaje sexista y el comportamiento humillante. Estos son componentes frecuentes de la conducta violenta hacia las mujeres que pueden tener consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Toda violencia física o sexual repercute también sobre el estado mental de la víctima¹⁹.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014) define la violencia económica o patrimonial como aquella acción y omisión, directa o indirecta, destinada a coaccionar la autonomía de una persona del grupo familiar, que cause o que pudiera ocasionar daño económico o patrimonial, o evadir obligaciones alimentarias, mediante la pérdida, transformación, sustracción o destrucción de bienes de la sociedad de ganancias o bienes propios de la víctima. Asimismo, mediante la limitación o suspensión en el ejercicio del derecho de propiedad sobre dichos bienes.

3.3. ANTECEDENTES

3.3.1. Internacional:

1. INFORME FINAL DE INVESTIGACION SOBRE VIOLENCIA CONTRA

LAS MUJERES INDIGENAS. GUATEMALA (Octubre-2007)

Realización de la investigación: Ramona Elizabeth Pérez Romero

Las mujeres de los 4 grupos focales de las dos comunidades lingüísticas (man y k'iche) manifestaron que existe violencia intrafamiliar en todos lados y, esto se refleja en los casos que atienden, en la actualidad, las ONG ya que el 100% son casos de este tipo.

Las mujeres manifiestan haber vivido violencia, pero dijeron también que no se lo cuentan a nadie porque hacerlo implica que las maltraten aún más. Otro punto en el que se debe

¹⁸ Cfr. Organización Panamericana de la Salud. “Informe mundial sobre la violencia y la salud” 2002:21.

¹⁹ Cfr. Flora Tristán y Amnistía Internacional. “La violencia contra la mujer: El feminicidio en el Perú” 2005: 11.

hacer hincapié, radica en que las prácticas de maltrato se agravan cuando una mujer no trabaja, es decir, por su situación de dependencia económica.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha reproducido en su educación, ya que se enseña a la mujer a mostrar pasividad y total obediencia al hombre. En la mayoría de casos, las mujeres violentadas no denuncian a los agresores, esto por diferentes razones: analfabetismo, desconocimiento de sus derechos y deberes ciudadanos, baja autoestima y discriminación por parte de los operadores de instituciones que imparten justicia, dejando sus casos impunes.

Los efectos de la violencia contra las mujeres son los siguientes:

1. Efectos psicológicos
2. Efectos socioeconómicos
3. Efectos físicos

2. CARACTERÍSTICAS CLINICOEPIDEMIOLÓGICAS DEL TRAUMA MAXILOFACIAL POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SANTIAGO DE CUBA (2010)

Realización de la investigación: Dr. José Manuel Díaz Fernández y Al. Anyi Fernández Cardero

En sus múltiples manifestaciones, la violencia constituye un creciente problema de salud y sus efectos repercuten especialmente en los grupos más vulnerables de la sociedad: las mujeres.

Cuba no está exenta de esta problemática, es frecuente observar en la calle o en el hogar la ocurrencia de altercados por el más mínimo desacuerdo. Los especialistas cubanos insisten en plantear que ello no es comparable con las desmedidas manifestaciones de crueldad que se producen a diario en otras naciones.

Las investigaciones sobre el maltrato a las mujeres cubanas, comenzó a adquirir relevancia a partir de la década del 90.

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 576 mujeres con traumas bucofaciales por violencia física, atendidas en el Servicio de Urgencia de Cirugía Maxilofacial del Hospital Provincial Docente Clínicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres” de Santiago de

Cuba, de 2007 a 2010. En la serie predominó el grupo de 15-34 años, los celos y la embriaguez como móviles para el maltrato, así como el esposo y el ex -esposo como principales agresores; asimismo, los incidentes se desarrollaron mayoritariamente en el domicilio y en la vía pública, donde se empleó como mecanismo lesional primario el puñetazo y los golpes con objeto. Entre las lesiones bucofaciales de tejido blando sobresalieron las formas cerradas (hematomas y escoriaciones) y abiertas (laceraciones faciales no complejas); entre los patrones lesionales de tejido duro, las fracturas nasales y dentoalveolares.

Durante el período de estudio fueron atendidas, en el Departamento de Urgencias del Servicio de Cirugía Maxilofacial, 576 mujeres lesionadas por acciones violentas, lo cual indica que el fenómeno investigado constituye un problema sanitario que debe ser objeto de intervención por parte del Ministerio de Salud Pública.

Por otro lado, éste estudio concluye que, para las personas expuestas a los efectos del alcohol, la inclinación a la violencia se triplica y considera los móviles de la agresión: las costumbres o tradiciones, el nivel sociocultural, las posibilidades económicas y el entorno familiar, de manera que las causas prevalecientes en algunas sociedades, ocupan un lugar periférico.

3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO. MÉXICO (Enero, 2012)

Realización de la investigación: Valeria Moscoso Urzúa, ana Yeli Pérez Garrido, María de la Luz Estrada

La violencia contra las mujeres es una problemática social que va en aumento en México por dos motivos: aumento de cifras de violencia y asesinato de mujeres y las sentencias emitidas por la CoIDH en contra del Estado por tres casos: “Campo Algodonero”, “Inés Fernández” y “Valentina Rosendo Cantú”. La situación de las mujeres mexicanas es alarmante, principalmente, porque no existe respuesta por parte de las autoridades, ya que éstas se desligan de su responsabilidad de impartir justicia, no pudiendo las mujeres afectadas acceder a la misma y manteniendo hechos de tal magnitud impunes.

Este trabajo ha permitido tener un alcance global de la situación actual, pues corrobora que la violencia se da en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres y que ésta se

configura como un fenómeno sistemático, amplio y complejo, cuyo origen e impacto son sociales.

Considerando la indiferencia del Estado frente a situaciones de violencia y una sociedad basada en la desigualdad, podemos afirmar que ambas situaciones facilitan la violación de derechos fundamentales y humanos de la mujer mexicana.

4. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ALGUIEN MÁS... VALENCIA - ESPAÑA (2013)

Realización de la investigación: María Lujan Piatti

A través de este trabajo, se puede afirmar que la violencia contra la mujer es una situación de abuso de poder, por razón de sexo y edad. Asimismo, se concluye que no existe el perfil de la mujer víctima de violencia, es decir, todas podemos serlo en algún momento; sin embargo, si se puede señalar que se trata de una víctima especial, pues el hecho de estar en un ambiente violento, le genera un grado mayor de sensibilidad, padeciendo de distorsión cognitiva que no le permite evidenciar que se encuentra en una situación de riesgo constante.

Otro punto a considerar es el trato que las mujeres maltratadas reciben por parte de los operadores de justicia y demás profesionales, debiendo darse éste sin juicios sino con la intención de escuchar, asesorar e informar.

La mujer víctima de violencia debe tener las herramientas necesarias para empoderarse y enfrentar los problemas originados por la violencia, tomando decisiones acertadas que le permitan romper el círculo de violencia.

No existe un perfil de maltratador, cualquier varón puede serlo si sus conductas se basan en que las mujeres son inferiores y, por ende, tienen derecho a ejercer el poder que la sociedad les atribuye sobre ellas.

5. VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA RELACIÓN DE PAREJA: UNA COMPRENSIÓN DE CÓMO A TRAVÉS DEL PROCESO DE DIGNIFICACIÓN

DE LA MUJER ES POSIBLE SALIR DE LAS DINÁMICAS INTERACCIONALES VIOLENTAS. BOGOTÁ (2012)

Realización de la investigación: Andrea Carolina Prada Olivares.

Esta investigación reconoce que es posible romper la pauta interaccional violenta, estableciendo formas de relacionarse más respetuosas y significativas, pues se considera que una vez identificado el malestar producto del maltrato, es posible reaccionar y buscar soluciones.

Asimismo, el presente trabajo se enfocó en las estrategias y herramientas que emplean las mujeres para salir del círculo de violencia; de ese modo, se observa a través de las conversaciones terapéuticas y los procesos reflexivos cómo éstas logran transformar el dolor causado por el maltrato, tomando decisiones propias para su bienestar, fortaleciendo su autoestima y teniendo el control de sus vidas, pudiendo actuar libremente.

El daño psicológico causado a la mujer víctima de violencia debe ser tratado terapéuticamente, para que el dolor generado sea el que la impulse a salir del circuito del abuso.

3.3.2. Nacional:

1. EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL Y SU IMPACTO EN LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN EL PERÚ, PERÍODO 2003-2009. LIMA (2012)

Realización de la investigación: Candy Jessica Aguirre Alarcón

El presente trabajo de investigación permitió probar que, a través del Programa en mención se contribuye en la reducción de la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, en el periodo 2004-2009.

La intervención del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través de una gestión por resultados, influye sobre la disminución de la Prevalencia de la violencia, en el periodo de estudio.

Los recursos son mínimos para la magnitud de la problemática.

La inversión del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MINDES, tiene una relación inversa. La tendencia a mayor inversión disminuye la variable de prevalencia de la violencia familiar y sexual, evidenciando en los resultados presentados que afectan en la prevalencia de la violencia familiar y sexual, siendo mínima la inversión en relación a la magnitud del problema.

Es de suma importancia tener presente el tema de prevención de la violencia familiar y sexual, motivo por el cual se debe tener mayor intervención en acciones de prevención, incrementando la cobertura de los servicios de atención y el trabajo articulado de la policía nacional y otros entes tanto públicos como privados.

La violencia familiar y sexual tienen consecuencias graves para la salud del ser humano, evitando o limitando su desarrollo personal.

La incidencia de violencia contra la mujer es mayor, correspondiente este dato a un 39% de mujeres en el Perú, entre los 15 y 49 años, han sido maltratadas por su esposo o compañero alguna vez, es decir, 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia.

Fortalecer el sector legislativo y judicial, para que estos delitos no queden impunes.

2. OBSTACULOS EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLOGICA EN EL PROCEDIMIENTO DE VIOLENCIA FAMILIAR NACIONAL ¿DECISIONES JUSTAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y DE GÉNERO? – Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia entre setiembre – diciembre 2011

Realización de la investigación: Inés Sofía Arriola Céspedes

Este trabajo de investigación señala lo relevante que es la responsabilidad que tiene el Estado frente a casos de violencia contra la mujer, con el fin de erradicar, sancionar y prevenir toda forma de violencia contra las mujeres, como se estableció claramente en la Ley 262601 e identificar los obstáculos que encuentran las víctimas en la modalidad de maltrato psicológico para acceder a la justicia.

El ámbito de estudio de la presente investigación se encuentra en el Distrito Judicial de Lima; y, la muestra se obtuvo de un universo de 27 expedientes sobre violencia familiar (modalidad de violencia psicológica), remitidos a la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima entre el 26 de agosto y el 2 de noviembre del 2011, para opinión fiscal. Escogiendo entre ellos, 11 expedientes para su análisis, para los cuales, la Segunda Sala de Familia de Lima había fijado la Vista de la Causa entre los meses de setiembre a noviembre del año 2011.

De esos 11 expedientes que llegaron a segunda instancia, 04 expedientes subieron en Consulta, ya que se declaraba infundada la demanda interpuesta por la Fiscalía Provincial y, los 07 restantes subieron en apelación de sentencia. Respecto de los presuntos agraviados: 08 expedientes son casos de mujeres (06 casos de mujeres adultas, 02 casos de niñas) y, los otros 03 expedientes son casos de hombres adultos.

Por otro lado, de acuerdo a la relación del agresor con la víctima, ésta fue mayoritariamente de cónyuge, una de ex cónyuge y las restantes de otros miembros de la familia, entre ellos 2 casos de madres demandadas en agravio de sus hijas menores de edad. Asimismo, conforme los expedientes analizados, se concluye que las mujeres víctimas de violencia se da entre mujeres adultas y niñas.

Otro aspecto importante es el referente a las formas de violencia psicológica denunciada por la víctima. Dentro de las formas de violencia están, en la mayoría de casos, los insultos, seguido de amenazas, las que señalan se producen tiempo antes de efectuada la denuncia. En los casos de las víctimas cuya relación es de cónyuge con el agresor, todas refieren que la violencia se produce desde hace años.

Los resultados obtenidos nos indican que uno de los obstáculos, para el acceso a la justicia de la víctima, se encontraba en la misma Ley, donde se refiere que la violencia psicológica, para que se verifique como tal, debe causar daño; sin embargo, en el artículo 2 de la mencionada ley no existe la definición de daño psicológico ni se establece criterios para la valoración del mismo. Existiendo un vacío legal, dicha valoración, en manos del juez, queda muy amplia, razón por la cual se dictan sentencias realmente contradictorias, evidenciándose una clara desprotección a la víctima.

Otro de los obstáculos evidenciados, radica en la demora para obtener las medidas de protección, esto a consecuencia de la demora en obtener los resultados de las pericias psicológicas.

Por otro lado, se logró identificar la escasa práctica de los magistrados de establecer una reparación civil para las víctimas de violencia y, finalmente, se concluyó que las normas internacionales no son tomadas en cuenta por los operadores de justicia, ya que, de acuerdo a los casos analizados, en ninguno se empleó normativa internacional.

3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ENTRE FAMILIAS DEL PROGRAMA SOCIAL JUNTOS A TRAVÉS DEL ARTE. PIURA (Junio, 2016)

Realización de la investigación: Belén Gonzales-Echave

Al interior de este departamento, la provincia del mismo nombre, Piura, concentra el mayor número de denuncias en el año 2015 y específicamente el distrito de Catacaos alberga el mayor número de casos. Su incidencia es significativa; sin embargo, estudios señalan que afecta aún más a los grupos de más bajos ingresos y de menor nivel de estudios. El presente proyecto priorizó el distrito de Catacaos como espacio de intervención y ha definido como destinatarios a un grupo humano especialmente vulnerable: las familias beneficiarias del Programa social JUNTOS, a través del cual el Estado ha identificado y organizado a la población de menores ingresos del país.

Las repercusiones de la violencia contra la mujer son variadas. Afectan la salud física y mental de sus víctimas y repercute en la calidad de vida de sus familias, en especial, en las de sus hijos, quienes tienen altas probabilidades de repetir escenarios de violencia. Todo ello conlleva a cuantiosas pérdidas económicas y en desarrollo humano a favor de las sociedades. Su incidencia es significativa en todos los niveles socioeconómicos, pero con mayor repercusión en los grupos menos favorecidos (pobreza o pobreza extrema).

La probabilidad de incidencia de la violencia contra la mujer está también asociada a factores de riesgo como son el consumo excesivo de alcohol, drogas y el trabajo remunerado fuera del hogar por parte de la mujer, lo que genera inseguridad en la pareja que termina por originar mayores niveles de violencia.

Los hallazgos sugieren que, entre las madres beneficiarias del Programa JUNTOS, la probabilidad de violencia es mayor que entre aquellas que no están afiliadas; incrementándose particularmente las formas de violencia física y sexual. La evidencia que sugiere una relación entre el Programa JUNTOS y el incremento de las probabilidades de ocurrencia de agresiones contra la mujer, evidencia la necesidad de realizar nuevos estudios sobre la supuesta capacidad de empoderamiento que tienen éstos programas sobre sus beneficiarias.

Esta investigación nos permite afirmar el arte tiene un carácter constructivo y creativo, por lo que se contrapone naturalmente a la violencia, como acto destructivo y ciego, pues favorece el desarrollo psíquico y emocional de las personas y se considera un recurso altamente efectivo para prevenir la violencia contra la mujer.

La actividad artística tiene incidencia positiva en los cuatro niveles funcionales de la violencia -individual, relacional, comunitario y social- al ampliar el potencial de empatía del individuo, crear vínculos sociales significativos y propiciar expresiones de sentido comunitario; generando un distanciamiento del individuo de conductas violentas.

4. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: FEMINICIDIO EN EL PERÚ. LIMA, PERÚ (Octubre, 2015)

Realización de la investigación: Flora Tristán

Nuestro país no es ajeno a los casos de feminicidio. Entre febrero del año 2003 y septiembre del año 2005, se han reportado 265 casos de crímenes contra mujeres. Es decir, un promedio mensual de ocho mujeres asesinadas.

Los autores de feminicidios no son personas con perturbaciones mentales, sino personas socializadas cuya acción no responde a emociones violentas sino a conductas desarrolladas en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer.

En el Perú, durante el periodo comprendido entre febrero de 2003 y septiembre de 2005 se han registrado 265 mujeres víctimas de feminicidio. Asimismo, se mostró que en 2003 se registraron 124 víctimas de feminicidio, mientras que en el año siguiente ocurrieron 100 asesinatos de mujeres. En el periodo comprendido entre enero y el primero de septiembre de 2005, se reportaron 41 casos de feminicidio. Además, algunas afectadas quedaron en estado de gravedad luego de la agresión.

La base de datos de Flora Tristán indica que el 58% de víctimas se encontraba entre los 17 y 34 años de edad. En tanto que el 17% tiene entre 35 y 52 años, mientras que un 10% está entre los 53 y 70 años de edad.

Por otro lado, de acuerdo al vínculo del agresor con la víctima, se observó que sólo en el 12% de casos el agresor era una persona desconocida al entorno de la víctima y mantenía relaciones sentimentales con ella. Así para los años 2003 a 2005, el 70%, 68% y 56% de agresores, respectivamente, fueron los esposos, parejas sentimentales o convivientes de las víctimas. Por lo que se concluyó que más del 64% de víctimas en el momento de la agresión mantenía una relación sentimental-afectiva o íntima con su agresor. Para los años 2003 y 2004, el 15% de los agresores mantuvo en algún momento una relación íntima. Asimismo, en los tres años, el 6%, 7% y 10% de los agresores, respectivamente, mantenía una relación familiar con la víctima: fueron sus padres, hermanos, tíos, primos e hijos.

Finalmente, según datos de 2005, sólo el 20% de agresores se encuentra detenido.

Conforme al tipo de agresión, el 52% de mujeres víctimas sufrieron la agresión en sus propias casas y un 23% en el domicilio del agresor, esto permite afirmar que estos espacios que deberían ser seguros para la mujer, son lugares de alto riesgo. Entre 2003 y 2005, el 53%, 49% y 54% de los crímenes, fueron realizados en el lugar donde la víctima residía.

Debemos mencionar también que el 25% de los crímenes fue perpetrado en hoteles u hostales.

En esta investigación, la clasificación “otros” hace referencia a los casos donde las mujeres fueron encontradas en lugares alejados, abandonadas luego de haberse cometido el crimen. Para los tres años se reportan 14%, 13% y 17% de estas situaciones respectivamente.

Del total de los casos registrados durante 2005, el 30% de las mujeres asesinadas fueron anteriormente víctimas de violencia familiar y recurrieron a instancias estatales, donde no encontraron respuesta rápida al problema.

Dentro de las modalidades de inhabilitar a la víctima, en el año 2003, tenemos: alcoholizadas 4%, golpeadas 55%, drogadas 10%, amenazadas 8%, engañadas 13% y

otros 10%. Para el 2004 los resultados fueron: alcoholizadas 5%, golpeadas 57%, drogadas 13%, amenazadas 8%, engañadas 9% y otros 8%. Y en el 2005: alcoholizadas 2%, golpeadas 60%, drogadas 7%, amenazadas 7%, engañadas 7% y otros 17%.

Conforme el medio que utilizó el agresor, los estudios determinaron que, en el 2003, los agresores emplearon: sustancia tóxica/veneno 8%, sin dato 4%, arma blanca 51%, arma de fuego 19%, otros 18%. Asimismo, en el 2004 los datos obtenidos fueron: sustancia tóxica/veneno 8%, sin dato 5%, arma blanca 52%, arma de fuego 20% y otros 15%. Finalmente, en el 2005: sustancia tóxica/veneno 10%, arma blanca 42%, arma de fuego 24% y otros 24%.

Otro de los puntos relevantes que se analizó en la presente investigación, es el de “Móviles supuestos para la agresión”. Si bien no existe una razón justificada para acabar con la vida de una persona, los agresores justifican la muerte de la víctima de esta manera:

2003: Negación a pedido del agresor 11%, temas económicos 6%, celos 37%, negación sexual 15%, infidelidad 5% y otros 6%.

2004: Negación a pedido del agresor 10%, temas económicos 9%, celos 44%, negación sexual 16%, infidelidad 16% y otros 5%.

2005: Negación a pedido del agresor 11%, temas económicos 6%, celos 44%, negación sexual 11%, infidelidad 14% y otros 14%.

5. ASOCIACIÓN ENTRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN RELACIÓN DE PAREJA Y EL NIVEL DE RIQUEZA. LIMA - PERÚ (2013)

Realización de la Investigación: Evelyn Flor del Pilar Gonzáles Carazas

Esta investigación analiza los factores que se asocian a que la mujer peruana viva una situación de violencia en la relación en pareja, concluyendo que éstos son:

Una situación de pobreza o baja riqueza.

Menor nivel educativo de la pareja, aumenta el riesgo de padecer algún tipo de violencia, sea psicológica, física y/o sexual. En este punto se debe precisar que los datos demuestran

que el nivel educativo de las mujeres peruanas no se asocia a ningún tipo de violencia contra las mujeres en relación de pareja.

1. La violencia atestiguada en la infancia.
2. Mayor consumo de alcohol por la pareja.
3. Mayor dependencia económica.

3.4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL.

3.4.1 Vinculación del Estado Peruano con los Tratados o Convenios Internacionales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y Marco Jurídico Nacional.

La violencia contra la mujer se encuentra dentro de un contexto internacional, por los tratados y convenios, en los que nuestro país es considerado Estado parte, teniendo en cuenta lo señalado por nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 55 “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”; del mismo modo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria que indica que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ratificados por el Perú” y nacional (Constitución Política del Perú que protege los derechos fundamentales de todo ser humano, en este caso particular, de la mujer). En ambos casos, lo que se pretende es velar por los derechos de la mujer y condenar cualquier violación de los mismos.

3.4.1.1. Marco Jurídico Internacional

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Aprobada por el Estado Peruano en diciembre de 1959²⁰. Considerado el primer instrumento normativo que reconoce los derechos de los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación, señalando que “nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (artículo 1) y que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3).

²⁰ Cfr. Resolución Legislativa N° 13282, 1959.

b) Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

Aprobado mediante Decreto Ley N° 22128, el 28 de marzo de 1978²¹. Pacto que vela por la igualdad entre hombres y mujeres y el reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y los mecanismos para su adecuada protección y garantía. Regula el derecho a la vida, que es inherente a la persona humana (numeral 1, artículo 6); asimismo, señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7); y, el derecho de todo individuo a la libertad y seguridad personales (artículo 9). Derechos que serían vulnerados por actos de violencia contra la mujer.

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

Aprobado mediante Decreto Ley N° 22129, el 8 de marzo de 1978²². Tiene como objetivo proteger, garantizar los derechos que en él se enuncian, sin ningún tipo de discriminación (artículo 3), haciendo mención a la importancia del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (numeral 1, artículo 12). Por tal motivo, es relevante considerar que toda mujer víctima de violencia debe ser atendida y llevar terapia psicológica, para generar su bienestar y el de su familia, lo que requiere de la participación multidisciplinaria de los entes estatales, que puedan verificar su cumplimiento.

d) Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Aprobada mediante Decreto Ley N° 22231, entrando en vigencia en nuestro país, el 18 de julio de 1978²³. Ésta convención compromete a los Estados a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, garantizando su libre y pleno ejercicio, sin discriminación (artículo 1). Dentro de éstos derechos y libertades tenemos: el derecho a la vida (numeral 1, artículo 4); derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (numeral 1 y

²¹ Cfr. Decreto Ley N° 22128, 1978.

²² Cfr. Decreto Ley N° 22129, 1978.

²³ Cfr. Decreto Ley N° 22231, 1978.

2, artículo 5) y derecho a la libertad y seguridad personales (numeral 1, artículo 7). Derechos que pueden ponerse en riesgo en casos de violencia contra la mujer.

e) Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer – CEDAW

Dicha convención fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países²⁴ y vigente, en Perú, desde el 13 de octubre de 1982. La CEDAW compromete a los Estados a adoptar determinadas medidas para que la mujer ejerza sus derechos, afianzando el reconocimiento del principio de no discriminación hacia la misma. Es preciso mencionar 5 artículos que se consideran relevantes, ya que impulsan y promueven la igualdad de género y condenan cualquier acto discriminatorio:

En el artículo 1, se define el concepto de discriminación:

“Denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

Por otro lado, en los artículos 2, 3, 5 y 24 se establece el compromiso de los Estados Partes a condenar todo acto discriminatorio contra la mujer, protegiendo de manera efectiva sus derechos y libertades, asegurando su desarrollo y propiciando la igualdad entre hombre y mujer. Del mismo modo, deberán eliminarse todo tipo de prejuicios o conductas estereotipadas.

Finalmente, la CEDAW, en su artículo 12, también reconoce el derecho a la salud.

f) Recomendación N° 19 del Comité de la CEDAW (1992)

Es aquí donde se considera que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Además, se exige a los Estados a que adopten

²⁴ Cfr. “Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer”. Consulta en: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>

medidas para suprimir todo tipo de discriminación que impida o limite su desenvolvimiento en la sociedad.

g) Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Belém do Pará (1994)²⁵

Sin duda, el tema principal es el de violencia contra la mujer, siendo la primera y única convención que trata éste tema de manera específica.

En los primeros artículos se define el concepto de violencia, considerándola “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, los tipos de violencia (artículo 2), el derecho de la mujer a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado (artículo 2) y describe, de manera detalla, sus derechos:

Artículo 4

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

- a. el derecho a que se respete su vida;
- b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
- c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
- d. el derecho a no ser sometida a torturas;
- e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
- f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

²⁵ Adoptada en Belém do Pará, Brasil, en el XXIV periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 06 de septiembre de 1994.

- g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
- h. el derecho a libertad de asociación;
- i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y
- j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.”

Por otro lado, en el Capítulo III, “Deberes de los Estados”, en el artículo 7 se señala:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas

jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

- f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
- g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
- h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

3.4.1.2. Marco Jurídico Nacional

a. Constitución Política del Perú

Nuestra Carta Magna tiene como fin supremo la “defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad” (artículo 1). Asimismo, contempla en su artículo 2, una serie de derechos que se ven afectados en casos de violencia contra la mujer como el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (numeral 1); a la igualdad ante la ley (numeral 2); a la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (numeral 22) y a la libertad y a la seguridad personales: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes (...)” (24.h). Por otro lado, establece en su artículo 44 que dentro de los deberes primordiales del Estado está: garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general.

b. Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y su Reglamento

La Ley N° 30364 fue promulgada el 23 de noviembre del 2015, derogando la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar; y su Reglamento, promulgado

el 27 de julio del 2016, ambos acorde a los compromisos adquiridos por el Estado Peruano con la normativa internacional, velando siempre por los derechos humanos.

El artículo 5 de la Ley establece la definición de violencia:

“La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”

Asimismo, define los tipos de violencia y establece, de manera detallada, los derechos de la mujer víctima de violencia; considerando dentro de los mismos, sus derechos laborales y en el campo de la educación.

Por otro lado, con respecto al Proceso, el artículo 6 del Reglamento indica que la finalidad del mismo es “proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten responsable”, señalando también que “en todas las fases del proceso se garantiza la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo de aquellas que corran riesgo de intimidación, represalias o victimización reiterada o repetida”.

Los cambios normativos durante el proceso, pueden considerarse beneficiosos, para un sistema de justicia más rápido y eficaz que proteja de manera efectiva a la mujer víctima de violencia. Es así que una vez efectuada la denuncia por la víctima en la Policía Nacional, ésta tiene un plazo máximo de 24 horas, para presentar un informe al juzgado correspondiente (artículo 15 de la Ley) y el juzgado tiene un plazo de 72 horas para dictar las medidas de protección (artículo 16 de la Ley).

Un punto importante es el de declaración de la víctima y entrevista única (artículo 19 de la Ley y artículo 11 del Reglamento), ya que tiene como fin evitar la revictimización de las agraviadas. Asimismo, el trato de los operadores de justicia es fundamental, ya que deben brindar seguridad, generando un ambiente de confianza y evitando tratos discriminatorios.

Lo que busca la mujer víctima de violencia es amparo y defensa de sus derechos y esto, a través de las medidas de protección que se le otorguen (artículo 22 de la Ley y 37 del Reglamento) las que deben ser idóneas, para brindar seguridad y bienestar. Se debe mencionar que las medidas de protección tendrán vigencia hasta que el juzgado penal

dicte sentencia o hasta el pronunciamiento fiscal que decida no presentar denuncia penal (artículo 23 de la Ley y artículo 40 del Reglamento).

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

Las tablas y los gráficos presentados a continuación, son el resultado de la revisión de 263 expedientes del Poder Judicial, los datos obtenidos por la Policía Nacional del Perú del distrito de Tacna y las entrevistas a profundidad realizadas a mujeres víctimas de violencia y distintos operadores de justicia. Las variables analizadas son: lugar de denuncia, edad de la mujer víctima de violencia, periodicidad de la agresión, tipo de violencia, lugar donde se produjo la violencia, motivo de la agresión, vínculo con el agresor, ocupación de la mujer víctima de violencia y el agresor, entre otras.

Tabla 1

Mujeres víctimas de violencia según lugar de denuncia Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Lugar de denuncia	Edad de la agraviada				n	%
	< 11	11 - 17	18 - 50	> 50		
Comis.G. Albarracín	0	6	241	33	280	32,9%
Comis.Alto Alianza	0	0	125	2	127	14,9%
Comis. G. Vigil	0	0	84	26	110	12,9%
Comis.Central	0	0	92	14	106	12,5%
Comis.Mujeres	0	3	51	11	65	7,6%
Comis. Pocollay	2	1	28	5	36	4,2%
Comis.La Natividad	0	0	29	6	35	4,1%
Comis Ciudad Nueva	0	4	21	8	33	3,9%
Comis.A.B. Leguía	0	0	31	0	31	3,6%
Otras Comisarias	0	0	22	6	28	3,3%
						100,0
Total	2	14	724	111	851	%

Fuente: Policía Nacional del Perú Tacna

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 1, del total de denuncias por violencia familiar registradas por la PNP, en la jurisdicción de la DIRTEPOL TACNA, en la provincia de Tacna, por mujeres víctimas de violencia según lugar de denuncia, encontramos que, la mayor cantidad de las mismas se han presentado en la Comisaría Gregorio Albarracín del distrito Gregorio Albarracín de Tacana (32,9%). En la Comisaría Alto de la Alianza, el 14,9%; en la Comisaría Vigil el 12,9% y el 12,5% en la Comisaría Central.

Tabla 2

Distribución de frecuencias según edad de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero - julio 2016.

Edad	n	%
< 11	2	0,2%
11 – 17	14	1,6%
18 – 50	724	85,1%
> 50	111	13,0%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú Tacna

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 2, se evidencia que el 85.1% de las mujeres que denuncian violencia tienen entre 18 y 50 años. Teniendo en cuenta que el perfil de la mujer víctima de violencia, para la realización del presente trabajo, es mayor de edad y relacionando ésta variable con el vínculo con el agresor, podemos decir que las mujeres mayores de edad, que tienen una relación de pareja (conviviente, esposo) son más propensas a ser víctimas de algún tipo de violencia. Sin embargo, es preciso mencionar también que un 1.6% de las denuncias son de mujeres menores de 18 años y un 13% de mujeres mayores de 50 años.

Tabla 3

Distribución de frecuencias según periodicidad de la agresión de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Frecuencia de la agresión	n	%
Primera vez	603	70,9%
Segunda vez	176	20,7%
Otro	72	8,5%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 3, se observa que en el 70,9% de los casos era la primera agresión sufrida; el 20,7 % se daba por segunda vez y el 8,5% por más de dos veces. De ese modo, podemos señalar que un 29,2% de mujeres denuncia el hecho de violencia únicamente cuando éste se ha dado en más de una oportunidad. Las razones que llevan a la mujer a no tomar acciones inmediatas y hacer efectiva su denuncia al ser violentadas por primera vez son diversas: dependencia emocional, dependencia económica, baja autoestima, considerar que los actos violentos son comportamientos normales, etc.

Tabla 4

Distribución de frecuencias según tipo de violencia de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Tipo de violencia	N	%
Física	297	34,9%
Psicológica	325	38,2%
Sexual	0	0,0%
Otros (física y psicológica)	229	26,9%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 4, encontramos que, de los tipos de violencia denunciados, la mayoría de casos es por violencia psicológica (38,2%); en segundo lugar, por violencia física (34,9%) y finalmente, físico y psicológico, con un 26,9%.

Tabla 5

Distribución de frecuencias según lugar de ocurrencia de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Lugar de ocurrencia	N	%
Domicilio	559	65,7%
Centro de trabajo	26	3,1%
Calle	136	16,0%
Otro	130	15,3%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 5, la mayor cantidad de casos (65,7%) de violencia familiar o agresiones denunciadas ocurrieron en el domicilio, lo que nos permite afirmar que el hogar, espacio que normalmente consideramos como aquel que garantiza seguridad, es el lugar que más desencadena actos de violencia, por lo tanto, el de mayor riesgo. Por otro lado, el 16% de casos de violencia se dieron en la calle, poniendo en evidencia la inseguridad que existe en la ciudad de Tacna y la falta de compromiso por parte de las autoridades del Gobierno local, Policía Nacional y serenazgo, para remediar la situación. Finalmente, sólo el 3,1% de agresiones ocurrieron en el centro de trabajo.

Tabla 6

Distribución de frecuencias según motivo de la agresión de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Motivo de la agresión (problema)	N	%
Conyugal	336	39,5%
Familiar	205	24,1%
Incompatibilidad de carácter	153	18,0%
Económico	113	13,3%
Alcoholismo	31	3,6%
Otros	6	0,7%
Salud	4	0,5%
Irresponsabilidad	3	0,4%
Total	852	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 6, el motivo de la agresión denunciada fue por problemas conyugales en un 39,5% de los casos, podemos entender como problemas conyugales: los celos, supuestas infidelidades, negación de la mujer a tener relaciones sexuales, querer terminar la relación de pareja, etc, lo que indica que cuando la mujer toma decisiones propias y no se somete a la voluntad del hombre, él no tolera la situación y ejerce violencia, para mantener el poder y subordinar a la mujer. En segundo lugar, por problemas familiares con un 24,1%; seguido por incompatibilidad de carácter en un 18%; problemas económicos, 13,3% y por estado ético 3,6%. Sin duda las cifras obtenidas, sugieren que el agresor ejerce violencia contra la mujer por decisión propia, ya que los casos de violencia por ingesta de alcohol, en el que se considera a la persona en un estado no ecuánime, son mínimos.

Tabla 7

Distribución de frecuencias según parentesco con el (la) agresor (a) de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Parentesco con el (la) agresor (a)	n	%
Conviviente	538	63,2%
Esposo (a)	177	20,8%
Ex conviviente	72	8,5%
Otro (cuñado)	17	2,0%
Padre/madre	14	1,6%
Otro familiar	11	1,3%
Hijo	10	1,2%
Ex esposo	6	0,7%
Padrastro	5	0,6%
Abuelo	1	0,1%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.
Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 7, el parentesco que tenía la denunciante con el agresor, en el 63,2% el agresor es el conviviente; el 20,8% es el esposo; el 8,5%, es el ex conviviente, y en menor medida otros familiares.

Tabla 8

Distribución de frecuencias según condición anímica del agresor de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Condición anímica del agresor	N	%
Ecuánime	508	59,7%
Ebrio	218	25,6%
Otros	81	9,5%
Enfermo / alterado	44	5,2%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 8, de acuerdo con las denuncias, en el momento de la agresión, el 59,7% de los agresores se encontraba estado ecuánime y el 25,6% en estado de ebriedad.

Tabla 9

Distribución de frecuencias según ocupación de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Ocupación de la agraviada	N	%
Profesional	538	63.2%
Comerciante	177	20.8%
Mando Medio	72	8.5%
Casa	17	2.0%
Estudiante	14	1.6%
Informal	11	1.3%
PNP	10	1.2%
FFAA	6	0.7%
Otros	5	0.6%
Total	850	99.9%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 9, la ocupación de las mujeres, en su mayoría es profesional, 63,2%; el 20,8% se dedica al comercio. Cabe destacar que el 1,6% son estudiantes.

Sin duda, el grado de instrucción no hace menos vulnerable a una mujer para vivir experiencias de violencia, pudiendo desencadenarse la misma en diferentes estratos socioeconómicos y culturales. Todas las mujeres están expuestas a los diferentes tipos de violencia, pues nos encontramos en un contexto cultural de discriminación y violencia contra la mujer.

Tabla 10

Distribución de frecuencias según ocupación del agresor de mujeres víctimas de violencia, Policía Nacional del Perú-Tacna, enero – julio 2016.

Ocupación del agresor	N	%
Comerciante	332	39,0%
Mando medio	248	29,1%
Informal	105	12,3%
Otro (Agricultor, pescador, chofer, taxista)	87	10,2%
Profesional	78	9,2%
PNP	1	0,1%
Total	851	100,0%

Fuente: Policía Nacional del Perú, Tacna.

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 10, en cuanto a la ocupación del agresor, el 39% de los mismos es comerciante; el 29,1%, mando medio; el 12,3% informal; y en menor medida agricultor, pescador, chofer, taxista, profesional o policía nacional. De ese modo, se observa que el nivel de instrucción no determina si un hombre es violento o no; por tal motivo, se puede afirmar que no existe un perfil único del agresor.

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA MUJER QUE VIVE EN EL DISTRITO TACNA Y QUE DENUNCIA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

Tabla 11

Mujeres víctimas de violencia según tipo de violencia denunciada, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Tipo de Violencia	n	%	% acumulado
Física y psicológica	101	41,7	41,7
Psicológica	81	33,5	75,2
Física	59	24,4	99,6
No se determino	1	0,4	100,0
Total	242	100,0	---

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 11, el tipo de violencia denunciado con más frecuencia es la violencia física y psicológica (42%). Seguida de solo violencia psicológica en un 34% y solo física 24%. Éstos datos difieren de los obtenidos por la Policía Nacional, ya que muchas de las mujeres que denuncian, no se presentan más, no pasando por los exámenes psicológicos y físicos correspondientes, para que se pueda realizar el informe policial y éste se envíe al Juzgado de Familia, encargado en dictar las medidas de protección.

Tabla 12

Mujeres víctimas de violencia según relación con el agresor, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Agresor	N	%	% acumulado
Conviviente	92	38,0	38,0
Ex conviviente	60	24,8	62,8
Esposo – conyugue	46	19,0	81,8
Hijo (a)	10	4,1	86,0
Padre de sus hijos	8	3,3	89,3
Cuñado (a)	7	2,9	92,1
Hermano (a)	6	2,5	94,6
Ex esposo – conyugue	4	1,7	96,3
Hermanastro (a)	1	0,4	96,7
Madrastra	1	0,4	97,1
Tío	1	0,4	97,5
Conviviente de su hija (o)	1	0,4	97,9
Padre	1	0,4	98,3
Conviviente y hermano	1	0,4	98,8
Sobrino	1	0,4	99,2
Conviviente e hija	1	0,4	99,6
Nieto	1	0,4	100,0
Total	242	100,0	---

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 12, evidenciamos que en la mayoría de los casos el agresor fue el conviviente (38%); en segundo lugar, el ex conviviente (24,8%) y en tercer lugar el esposo o conyugue (19%). Los datos obtenidos nos permiten afirmar que existe un alto índice de violencia

ejercida por la pareja o ex pareja, haciendo un total de 210 casos, y es éste vínculo el que genera mayor riesgo a la mujer de tener experiencias de violencia.

RESPUESTA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO FRENTE A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, EN EL DISTRITO TACNA.

Tabla 13

Mujeres víctimas de violencia según medidas de protección, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Medida de protección	n	%
Si	241	99,6
No	1	0,4
Total	242	100,0

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 13, el 99,6% de las mujeres que han denunciado violencia contra sus agresores recibieron medidas de protección de parte de organismos del Estado. Sin embargo, es de suma importancia relacionar el hecho de otorgar medidas de protección con el tiempo que se tomó el ente judicial para hacerlo (TABLA N°15) y, si bien 241 mujeres recibieron medidas de protección, únicamente 38 lo hicieron en el periodo prevista por ley.

Tabla 14

Mujeres víctimas de violencia según medida cautelar, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Medida cautelar	n	%
Si	1	0,4
No	241	99,6
Total	242	100,0

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 14, el 99,6% de las mujeres que han denunciado violencia contra sus agresores, no han recibido medida cautelar y solo el 0,4% de los casos si recibió esta medida.

Tabla 15

Mujeres víctimas de violencia, según días de demora para recibir medidas de protección, Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Días	n	%	% acumulado
1 a 3 d. (72 horas)	38	15,7	15,7
4 a 30 d.	192	79,3	95,0
31 a 60 d.	8	3,3	3,3
61 a 120 d.	1	0,4	3,7
121 a 180 d.	1	0,4	0,4
181 a 240 d.	2	0,8	1,2
Total	242	100,0	---

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 15, respecto al tiempo para recibir atención de parte de los organismos del Estado, luego de presentada la denuncia de la mujer por violencia sólo el 15,7% de ellas son atendidas en menos de 3 días, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 30364; mientras que el 79,3% se atiende en un período de hasta 30 días, observándose deficiencias en el sistema judicial y desprotección a la mujer víctima de violencia, pues no se le otorga tutela inmediata, lo que puede poner en riesgo su bienestar.

Tabla 16

Mujeres víctimas de violencia, según remisión de caso a la Fiscalía, Tacna, enero – julio 2016.

Remisión a fiscalía	n	%
Si	242	100,0
Total	242	100,0

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 16, la Fiscalía recibe el 100% de los expedientes por parte del Juez de Familia, para que pueda dar inicio al proceso penal, es decir, se inicia la etapa de sanción, en caso corresponda, siguiendo lo establecido en el Código Procesal Penal.

Tabla 17

Mujeres víctimas de violencia, según remisión de caso al Poder Judicial Tacna, enero – julio 2016.

Remisión a Poder Judicial	Frecuencia	Porcentaje
Si	239	98,8
No	3	1,2
Total	242	100,0

Fuente: Poder Judicial 2017

Elaboración propia

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 17, observamos que el 98,8% de casos de violencia contra la mujer pasan finalmente al Juzgado Penal para que se emita sentencia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia, dando fin a la etapa de sanción.

LA RUTA QUE ADOPTA LA MUJER QUE DENUNCIA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

SOPORTE SOCIAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE PAREJA.

Las mujeres que sufren violencia en sus relaciones de pareja, tienden a convertir este hecho en un secreto muy personal. No comunican de las agresiones sufridas, al interior de sus hogares, a sus familiares cercanos por vergüenza y temor. Solo cuando sienten realmente que la violencia no va a cesar y se encuentran en peligro de muerte, toman la decisión de contar su problema en busca de apoyo. La primera persona a la que recurren es generalmente su madre, una amiga u otro pariente cercano.

“Nunca conté a nadie mis problemas. Un día, decidí contarle a mi sobrina, le dije “tu tío es agresivo, manipulador, me golpea y seguramente me va a matar en cualquier momento y no sé qué hacer, quiero ir a una comisaria cercana. En una situación como la que le cuento, ¿a quién le iba a pedir auxilio, a quién ?” **Sandra**

Las mujeres víctimas de violencia no encuentran apoyo inmediato, por parte de los que atestiguan la violencia que sufren y ello, debido a que las personas, como los vecinos, consideran la violencia contra la mujer un problema que debe resolverse únicamente en el ámbito familiar. Otra de las razones, se debe al temor a involucrarse en un problema que no es el propio.

“Si algo tengo claro es que la gente tampoco se mete, ellos no hacen nada por ayudar. Una vez yo estaba en mi casa, llega mi ex conviviente y me empuja con toda la fuerza, se expresa de mi persona con palabras denigrantes, me dijo de todo. Yo, asustada por lo que estaba ocurriendo, salí a pedir ayudar a mi vecino, quien estaba con algunos compañeros de trabajo, y supliqué que hagan algo o llamen a la policía, pero ¿qué me dijeron ? Que ellos no iban a hacer nada, ninguno se metió”. **Julia**

Cuando una mujer víctima de violencia, decide contar su situación y confiar en su familia, la misma duda de su capacidad para terminar de forma definitiva una relación de pareja violenta.

“Sí, me apoyó. En realidad, me apoya, pero como ella me dijo “yo te voy a ayudar, pero de que me sirve, si tú vas a volver con él como si nada hubiese pasado”. **Rocío**

Para huir de la violencia de pareja, las mujeres recurren a la familia de origen. Buscan protección ante el agresor y apoyo material para sobrevivir, en la mayoría de casos, junto a sus hijos. Ante la carencia del círculo familiar que la pueda proteger y acoger, el temor ante la agresión de parte de su victimario es agobiante.

“Ahora ya no vivo con mi pareja, me fui a vivir a la casa de mis padres, ¿qué hago ? ¿A dónde recorro ? porque ya se archivó mi caso, eso fue lo que me informaron que ya se archivó y ya no puedo hacer nada”. **Aydé**

“No, si intentaba, lo denunciaba, pero abandonaba el proceso por miedo, porque él me amenazaba. Cada vez que lo denunciaba, lo dejaba por temor a que me mate, porque sentía que nadie me podía ayudar. Mi mamá murió cuando era niña y mi papa es un hombre enfermo, no tenía a quién acudir. Y, por ejemplo, ahorita estoy tranquila pero cuando me acuerdo de todo lo que pasó, siento miedo y creo que me va a encontrar”.

Teresa

LA RESPUESTA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO FRENTE A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR PARTE DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

BUSQUEDA DE PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LA VIOLENCIA DE PAREJA.

El primer lugar al que acuden las mujeres víctimas de violencia, cuando deciden denunciar a su agresor, es la Comisaria. Cuando acuden a la policía, ésta las deriva al médico legista para poder encontrar las evidencias necesarias, es decir, poder verificar las agresiones de las que han sido víctima.

“Al haber hecho la denuncia de una agresión física a la policía, lo que me dijeron fue que tenía que pasar por el médico legista y así fue. Pasé el examen médico legal, no salió ninguna evidencia, no se evidenció nada en ese momento y entonces ¿qué paso ? la policía me dijo simplemente que después me llamarían”. **Geovanna**

La mujer que denuncia violencia en la Comisaría, tiene la percepción que la policía no se sensibiliza con su situación, la cosifica y se enfrasca en encontrar evidencias físicas ocurridas el día en que se produce la agresión. Es decir, si la mujer, por motivo de la violencia de la que fue víctima, no puede salir de casa para denunciar en el momento la agresión, con rastros de la misma, es poco probable que vaya a proceder su denuncia. Incluso, en algunos casos, las mujeres han percibido que la policía se burla de su denuncia y minimiza su situación.

“Yo le expliqué todo mi caso, les conté que yo antes de esa violencia física, había sufrido violencia psicológica, pero la policía me dijo “No. Cuéntame lo que te ha pasado hoy”, y ese día, a mí, no me había agredido psicológicamente, sino físicamente, ¿entonces, ¿qué? Después me dijeron que me llamarían a los dos días. Hice todo el procedimiento, pasaron dos días y no recibí ninguna llamada. Una denuncia fue por separación hace cinco años; otra, para que se retire de la casa; hubo una por maltrato psicológico y físico. También lo denuncié por maltrato físico y psicológico en diciembre del año pasado y la última vez, regresé a la misma comisaria y lo único que recibí fue burlas y más humillaciones”. **Andrea**

En caso la mujer acuda a denunciar en la DEMUNA y no en la Comisaría, se puede evidenciar que la misma no encuentra la información suficiente para poder realizar la denuncia en el lugar adecuado, lo que denota una falta de solidaridad en el personal que trabaja en esta entidad.

“Si, primero fui la DEMUNA. Ahí me dijeron que, básicamente, la DEMUNA es para niños y familia y, que como yo era mayor de edad, no me podían dar muchas instrucciones. Lo único que me recomendaron fue que vaya a la policía”. **Rocío**

Las denunciantes tienen la percepción que la Policía no está dispuesta a brindar apoyo efectivo y concreto; por el contrario, presentan el proceso de denuncia como una serie de acciones engorrosas que, al concluir, no tendrá el resultado esperado por la mujer que denuncia a su agresor, es decir, no se efectuará ningún tipo de sanción.

“Fui y, simplemente, el policía me dijo que vaya a otro lugar... Y que, el proceso iba a ser muy largo. No me brindaron ayuda, únicamente me mandaron a otro lugar...”. **María**

Las denunciantes dudan de la capacidad de la policía, para dar un buen servicio, aun siendo del mismo género. La falta de calidez en la atención es percibida por las mujeres que denuncian violencia, así como un trato despectivo y que no les genera confianza.

“Fue una policía mujer. Se ve que, es de esas personas que han entrado por vara, porque cuando entran de esa manera, es evidente y yo me doy cuenta porque sólo ven el hecho de estar ahí, como una opción de trabajar y generar ingresos, no ven más allá, no se dan cuenta que tratan con otros seres humanos con problemas”. **Norma**

“Me dijo que no tenía cómo probar que realmente había sido víctima de una agresión. Sentí que no me podían brindar ayuda y yo, en ese momento, realmente la necesitaba. Fue como si hubiese ido por gusto, sólo perdí mi tiempo, porque no encontré ayuda”. **Rocío**

La policía desconfía de lo narrado por las mujeres que denuncian agresión de pareja y, son las últimas, las que señalan que sus casos no han sido debidamente presentados por la policía, motivo por el cual han sido archivados. En consecuencia, las mujeres víctimas de violencia no pueden acceder a la protección que el Estado les brinda, quedando en total desamparo.

“Me llegó una carta que indicaba que el examen médico legal había salido negativo y que el caso se había archivado. Entonces, no tomaron en cuenta lo que les había dicho que días anteriores había sufrido. He vivido dos años con mi pareja, ha sido una convivencia complicada y llena de agresiones verbales, por lo que creí que, con los exámenes tomados, se podría probar la violencia psicológica, pero no fue así, el caso se archivó. En la actualidad, mi ex pareja es profesional, él dice que me va a apoyar económicamente, lo

que me parece bien, pero ahora mi miedo es que quiera quedarse con mi hijo, llevárselo a su casa, compartir con él, ese es mi temor, porque yo he convivido con él, lo conozco, sé sus reacciones y ya no sé cómo proceder porque, como comentaba, mi caso ya se archivó”. **Ayde**

“Sí, porque la persona que ama su profesión, le gusta trabajar, sabe lo que quiere con su trabajo, eso se nota. El día que acudí a la Policía, todos se mostraron indiferentes frente a mi caso. Me dijeron “pero si ya le han dado sus medidas de protección”, y efectivamente me las dieron, pero eso no me servía de nada. Yo les dije “a mí no me sirve de nada un documento, dígame usted quién me protege” Yo marco un número y no me contestan, si yo le informo a un serenazgo lo que me pasa, lo primero que hace es pedirme mi documento, sin importarle el riesgo que corro o la crisis emocional en la que me encuentro”. **Mery**

La mujer víctima de violencia por su pareja también busca ayuda en el personal de serenazgo, por ser más cercano a su domicilio e inmediato a encontrar; sin embargo, evidencia que dicho personal requiere de ciertos documentos que permitan su identificación, como el DNI, exigencia inadmisibles, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encuentra una mujer al momento de la agresión y lo que tiene que hacer para poder salir del hogar en busca de ayuda.

“Yo les decía “pero el usa arma y si me dispara en el momento en que estoy buscando mi documento o que estoy saliendo” si me dispara, ¿qué voy a hacer? ¿Esa es la protección que me brindan? Ese tipo de protección yo no necesito, porque un papel a mí no me cubre de una bala, no me defiende de un cuchillo, no me salva de un ahorcamiento”. **Ángela**

En algunas oportunidades, la policía recomienda a la mujer que sea ella quien tome las medidas de protección necesarias, como asegurar las entradas de su casa, evitando ser agredidas sorpresivamente por sus ex parejas, sin considerar que muchas de las mujeres que denuncian violencia no tienen los recursos económicos necesarios, para invertir en la seguridad de su domicilio.

“Me decían que así es la ley, que ellos nada podían hacer, me repetían “usted tiene que estar preparada, proteger su casa, cerrar su puerta y si usted siente que tocan la puerta, cierre bien sus puertas y sus ventanas y si tiene por donde huir, lo hace” Y yo les contaba que mi puerta está cerrada únicamente con una pita, no tiene seguro. Yo a media noche estoy durmiendo y él puede entrar, les explicaba y ellos me decían “pero vea usted como hace, como asegura o vea a donde va, nosotros no podemos estar las 24 horas en su puerta”. Y claro, no pueden estar las 24 horas en mi puerta, esa es la impotencia que tenemos todas, porque nadie nos puede cuidar y es por eso que amanecemos muertas. Ellos se encargan de resonar más que de preocuparse por lo que pasamos”. **Norma**

BARRERAS QUE LOS OPERADORES DE JUSTICIA TIENEN PARA CUMPLIR CON EL PROPÓSITO JURÍDICO DE AUXILIO A LA MUJER QUE DENUNCIA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

CONOCIMIENTOS QUE MANEJAN LOS OPERADORES DE JUSTICIA SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Algunos operadores de justicia reconocen que el problema de violencia contra la mujer es un problema de salud pública y saben que existe un marco legal nacional e internacional al respecto. Los profesionales de psicología adscritos al Ministerio Público tienen una conceptualización más sociológica del problema de violencia contra las mujeres.

“Es un problema de salud pública que se encuentra catalogado como un problema de lesa humanidad, por el cual se han firmado una serie de convenios internacionales para darle frente y que, a raíz de estos convenios, como la convención de CEDAW, el Perú ha implementado leyes para proteger a la mujer y a la familia”. **Abogado del CEM**

“Conforme a la ley 30364 , se tiene conocimiento de la guía de daño psíquico para víctimas de violencia familiar y tortura; del mismo modo, se conoce la guía de violencia familiar para víctimas atendidas en consultorio, la guía sobre entrevista única en cámara gessel, la guía de procedimientos para víctimas de violación sexual atendidas en consultorio en la guía Nich para víctimas de abuso sexual, la guía Michigan de protocolos

Tark, en la que se utilizan los dibujos anatómicos de House, la entrevista cognitiva , la entrevista Steve Wiss. Y bueno, otros elementos que no están dentro de los protocolos nacionales e internacionales”. **Psicólogo 1. Instituto de Medicina Legal**

“El tema de violencia familiar es un tema social, en el que el estado peruano está involucrado hace muchos años, con el fin de poder erradicarlo e intentar prevenirlo, a través de la emisión de nuevas leyes favorables para proteger a la víctima de violencia familiar, así como la última ley que dispuso el gobierno: la ley 30364. Esta es una ley donde se da más protección a la víctima, es una ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres integrantes de un grupo familiar; se ha publicado a fines del 2015 y su reglamentación ha salido recién este año (2016), el pasado 27 de julio, aproximadamente”. **Psicólogo 2 Ministerio Público**

Por otro lado, podemos decir que existen operadores de justicia que no tienen mayor conocimiento teórico del tema de violencia contra la mujer, lo que podría, en alguna medida, significar un menor grado de sensibilización con el tema (característica necesaria para que un operador de justicia desempeñe de manera adecuada sus funciones). La mayoría se encuentra en proceso de formación académica; sin embargo, consideramos que deberían estar muy preparados para poder poner en marcha los cambios que presenta la nueva ley y, de ese modo, las mujeres puedan ejercer sus derechos y acceder a justicia de manera rápida y eficaz. Debemos señalar también que los conocimientos que tienen respecto al tema están estrictamente relacionados con la parte legal (conocen la normatividad reciente).

“¿Conocimiento referentes al tema de violencia? Bueno, tenemos la ley 30364 y el reglamento recientemente aprobado. La fecha de publicación de este reglamento ha sido el 27 de Julio”. **Juez de familia**

“Hasta el momento no hay ningún curso con relación a la ley 30364, lo que si hemos tenido este año es un conversatorio con todos los operadores de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, MINDES y Policía Nacional, para poder regular los procedimientos que se mencionan en la ley, pues no existía reglamento alguno de la ley. Por tal motivo, todos interpretaban la ley conforme les convenía. En la escuela

donde me he formado, he llevado sólo un curso de violencia familiar”. **Comisario de familia**

“Para empezar, cabe resaltar que la ley contra la violencia familiar que, ya no se llama así, ha sido cambiada recientemente el mes de noviembre. Entonces, hasta el momento, no hay ningún curso en el que hablemos sobre la infracción a la ley 30364. Lo que, si hemos tenido este año, es un conversatorio con doctores, operadores de justicia, poder judicial, ministerio público, también con medicina legal, MINDES y Policía Nacional, para poder, de alguna manera, regular el procedimiento que se debe seguir porque hasta el momento, hasta el día 28 de julio, no ha habido reglamento de la ley”. **Mujer policía**

De acuerdo a los testimonios mencionados, podemos observar que, en la mayoría de casos, los operadores de justicia no han recibido capacitación en el tema de violencia contra la mujer durante sus estudios de formación profesional; por lo que sus conocimientos sobre el tema, provienen de cursos de capacitación que se suelen dar para profesionales en general y algunos especializados dados por el sector judicial.

“Actualmente no hemos recibido ninguna capacitación y esto, debido a que la ley ha sido cambiada recientemente. Desde este cambio, no han promocionado cursos”. **Fiscal adjunto**

“Como se ha cambiado la ley, no hay cursos al respecto. Además, debemos tener presente que el nuevo reglamento ha salido hace poco”. **Abogada, Fiscalía de la familia**

ACCIONES REALIZADAS POR LOS OPERADORES DE JUSTICIA FRENTE A UNA DENUNCIA DE VIOLENCIA DE UNA MUJER CONTRA SU PAREJA.

En la Fiscalía de Familia, la labor que desempeña el fiscal consiste en investigar y calificar las lesiones, para luego remitirlas a los jueces de familia. Es en esta última instancia, en la que muchas veces, no se considera las medidas de protección, lo que indudablemente aumenta la situación de riesgo de la denunciante frente a su agresor.

“Bueno, cuando llegan estos casos, nosotros optamos por dos cosas. Una, que es la investigación y la otra, devolver la investigación porque se trata de faltas, es decir de lesiones calificadas como faltas. Solo en esos casos devolvemos el caso, porque es el juez, según la norma, quien debería calificar los actuados. Después, con el debido razonamiento, se debe remitir a la fiscalía y aquí debemos hacer hincapié, pues nos hemos dado cuenta que los jueces de familia remiten todas las carpetas, todas las investigaciones, sin hacer el análisis correspondiente, lo que no está bien, ya que se debe ver si corresponde o no corresponde; inclusive, a veces, no se da ninguna norma de protección, no se dispone ninguna medida de protección y aun así la remiten. Por lo mencionado es que devolvemos la investigación, porque ellos deben hacer su trabajo. Además, la norma les señala que ellos deben de, previo análisis de los actuados, meditar si es que su remisión es o no necesaria a ministerios públicos, no es cuestión de remitir todo”.

La Fiscalía Mixta Gregorio Albarracín y la Fiscalía de la Familia reciben casos de violencia familiar y en el desarrollo de su trabajo, aplican la Ley de Violencia contra la mujer.

“Bueno, efectivamente, nosotros somos fiscales mixtos en esta corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa y dentro de nuestras atribuciones, conocemos los temas sobre violencia familiar o todo lo que atañe a menores de edad y problemas intrafamiliares; sin embrago, desde fines del año pasado, al entrar en vigencia esta nueva ley de violencia contra la mujer, ya se ha...”. **Abogada Fiscalía Mixta Gregorio Albarracín**

“Bueno, justamente nosotros, por el tipo de usuario que tenemos, considerando que un buen numero son víctimas de violencia familiar, debemos tener conocimientos del punto de vista médico, todo lo que es semiología de lesiones, fisiopatología de lesiones y, obviamente, desde el punto de vista del derecho, porque la función médico legal es la de servir. Somos el órgano científico del Ministerio Público y el Ministerio Público es una entidad donde trabajan abogados; por lo tanto, tenemos que tener conocimientos sobre derecho para poder mantener un dialogo, para que exista un nexo de conexión entre dos carreras totalmente diferentes, como son las carreras de las ciencias médicas y las ciencias jurídicas”. **Abogada Instituto medicina legal**

“La ley de violencia familiar que ha sido derogada y la nueva que se viene aplicando, se hace desde una perspectiva de derecho penal. La nueva ley 30364 se ha penalizado, porque los hechos que se vienen evidenciando a nivel de la sociedad en sí, reflejan un alto porcentaje de daño a la mujer, feminicidio y muertes; por esta razón, es que se ha penalizado esta ley. Antes se aplicaba en el trámite civil común, ahora que entró en vigencia la nueva ley, derogando la anterior, se penaliza”. **Agente oficial fiscalía de familia**

En el caso del CEM, el trabajo del abogado consiste en dar asesoramiento y acompañamiento legal a la mujer que denuncia violencia de pareja.

“Mi trabajo consiste en el acompañamiento, la asesoría y buscar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia familiar y sexual, como prioridad, el realizar acciones de prevención para el funcionamiento de las debidas políticas públicas, que vayan en mérito de erradicar los niveles de violencia contra la mujer y contra los miembros del grupo familiar”. **Abogado CEM**

El juez tiene la tarea de dictar las medidas de protección para la mujer que denuncia violencia de su pareja, para lo cual cumple con la normatividad vigente.

“Dictar medidas de protección, y si el caso lo amerita, medidas cautelares, en un plazo de 72 horas de recepcionada la denuncia”. **Jueza poder judicial**

LA FISCALÍA trabaja directamente con la policía nacional. En cuanto es informada, por ésta, de una denuncia de violencia contra la mujer, acude a la Comisaria y procede con la investigación y las pericias psicológicas. Asimismo, cumple con informar a la autoridad competente, para que tome las medidas necesarias de protección para la denunciante.

“En ese caso, nosotros lo asumimos por turno, porque nosotros ingresamos por turno. Nosotros, en esta fiscalía somos 6 fiscales, que hacemos turnos por despacho y para 2 despachos, cada despacho de 6 días; por tanto, la organización que tenemos es asumir cada uno - dos días; en estos dos días nosotros tomamos la noticia, en este caso la

información de la policía o de forma directa también, ya que los usuarios pueden venir de forma aquí al Ministerio Público a poder dar conocimiento de algún hecho, como de maltrato en su agravio. Normalmente, van o acuden directamente a la comisaria o en su defecto llaman por teléfono y nosotros tomamos conocimiento de este hecho, nos constituimos a la comisaria o al lugar donde este aconteciendo el hecho de maltrato. Lo siguiente que se debe hacer es pasar de forma inmediata al reconocimiento médico legal, así como a la pericia psicológica. Debo señalar también que hacemos una inspección técnica dentro de la escena donde se produjeron los hechos, materia de abuso, de agresión o de violencia. Asimismo, se toman las declaraciones necesarias de todas las personas consideradas víctimas, como los menores de edad involucrados, por lo que se considera necesario que también pasen las pericias psicológicas o, en caso de ser necesario, los reconocimientos médicos legales”. **Fiscal adjunta fiscalía Mixta corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa**

MEDICINA LEGAL es el órgano científico del Ministerio Público. Realiza los peritajes médicos a la agraviada y realiza una valoración de las lesiones, la misma que sirve de medio probatorio para el fiscal.

“Claro, nosotros somos el órgano científico del Ministerio Público de la ciudad de Tacna, del Instituto de Medicina Legal nivel II, entonces tenemos la responsabilidad, la función del peritaje de todos aquellos casos de violencia familiar en todas sus formas, tanto en violencia física, violencia psicológica, violencia por abandono, ya sea de la mujer, de niños y de personas adultas mayores. Cuando se trata de personas en abandono, entonces nosotros realizamos los peritajes médicos legales con la finalidad de hacer un estudio consensuado de las lesiones que tengan los peritados o nuestros usuarios víctimas de violencia familiar. El objetivo es realizar una valoración de las lesiones, ese es el objetivo que nosotros tenemos que cumplir como médicos legistas, y esa valoración es la que sirve como medio probatorio para la función fiscal, la misma que va a incorporar nuestros peritajes a una carpeta fiscal, que desde ese momento se va a convertir en un medio probatorio”. **Médica IML**

El PSICOLOGO FORENSE trabaja directamente en la evaluación del estado emocional de la denunciante y lo hace de acuerdo a una guía de psicología forense específica para víctimas de violencia familiar.

“Hasta antes de la ley, el trabajo del área de psicología consistía en evaluar el estado emocional de la víctima frente al hecho específico materia de violencia, este estado emocional se evalúa o se gradúa en categorías según la guía de psicología forense para víctimas de violencia familiar”. **Psicólogo 1 IML**

“El trabajo, en sí, del psicólogo, es decir, nosotros como psicólogos forenses debemos determinar la afectación emocional que sufre la víctima ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, etc. Determinamos el tipo de violencia, que sufre la víctima. Ahora, el procedimiento que nosotros hacemos es el siguiente: nos remiten a nosotros la denuncia, para hacer la evaluación del peritaje psicológico y como le dije al inicio, tenemos que determinar la afectación emocional, y ¿en qué consiste la afectación emocional? La afectación emocional es el grado de alteración emocional que ha sufrido la víctima, es el daño o perjuicio que se genera en su comportamiento, es decir, si esta tensa emocionalmente, si existe un choque emocional o estrés emocional, si hay algún cambio de forma mental”. **Psicólogo 2 IML de Tacna**

Los cambios producidos en los últimos meses, a raíz de la aplicación de la Ley **30364 LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, han originado una alteración en las funciones de los diversos operadores de justicia frente a una denuncia de violencia contra la mujer. La Fiscalía de la Familia toma en sus manos casos de maltratado de menores.

“Con la ley 30364, los fiscales de familia han dejado de conocer de manera directa y en su totalidad los casos de violencia familiar, ya que ahora los ve el fiscal penal. La función que nos compete a nosotros, en caso que haya niños maltratados, es asumir una labor de manera indirecta, ya que es la policía quien asume directamente el caso de menores, porque si son mayores no hay problema. Con el nacimiento de la nueva ley, algunas funciones han vuelto, una vez más, al fiscal de familia. Tenemos que recibir las denuncias

por violencia familiar, al igual que la policía. Hay un reglamento que indica que debemos recibir denuncias, médico en declaración, examen físico, etc.”. **Fiscal agente oficial de familia**

La Comisaria de la Familia tiene un campo más amplio de atención de denuncias. Aceptan denuncias de todo tipo de maltrato y contra cualquier integrante de la familia.

“Específicamente, en esta comisaria de la familia, porque así se llama, se reciben tipos de denuncias que van en contra o que tienen como agraviadas a mujeres y personas vulnerables del grupo familiar, es decir, no necesariamente que sean efectuadas únicamente por mujeres, pueden ser hechas por cualquier persona, ya que también recibimos denuncias en contra de la mujer y los tipos de violencia son múltiples: maltrato físico e, incluso, por violencia sexual”. **Comisario de familia**

Sin duda alguna, existe necesidad de aclarar las competencias tanto de la Policía como de la Fiscalía frente a las denuncias de maltrato que se puedan presentar.

“Hemos perdido un poco nuestras atribuciones directas respecto a los casos de violencia familiar en cuanto a la expedición de las demandas, los casos archivados, el conocimiento directo del caso, ya que el nuevo procedimiento indica que la policía dentro de las 24 horas debe remitir directamente al Poder Judicial. En los casos de violencia familiar, se debe remitir el informe respectivo con los actuados que correspondan a fin de que sea el propio juzgado quien emita las medidas de protección y después de ello, pasará nuevamente al Ministerio Público. En nuestro caso, por ser mixtos, también somos fiscales penales y, por tanto, nuevamente nos remiten esos expedientes a fin de que los veamos desde un ámbito penal, previa evaluación”. **Abogada fiscalía mixta Gregorio Albarracín**

4.2. DISCUSIÓN

El presente estudio nos permite evidenciar cómo se han incrementado las estadísticas de injusticia, vulneración de derechos humanos y opresión de la mujer en pleno siglo XXI.

Debemos reconocer que aún con toda la normativa internacional que obliga a los Estados parte a crear un entorno seguro y libre de violencia para la mujer, los casos de agresión siguen generando controversia y alarman a la población. La mujer es objeto de discriminación, menosprecio y violencia en sus diversas formas; por tal razón, los índices de desigualdad siguen incrementando y, cada día, nos alejamos más de una sociedad democrática que tiene como objetivo primordial la justicia e igualdad.

Podemos decir que ni el hogar es, hoy, un lugar seguro para la mujer y esto lo demuestran los porcentajes que presentamos a continuación. La mayor cantidad de casos de violencia o agresiones denunciadas se dieron en el domicilio, alcanzando un 65,7%; el 16% en la calle y sólo el 3,1% ocurrieron en el centro de trabajo (TABLA N°05). Las causas de dichas agresiones se deben a problemas conyugales (39,5%), problemas familiares (24,1%), incompatibilidad de carácter (18%), problemas económicos (13,3%) y que el agresor se encontrara en estado etílico (3,6%) (TABLA N°06). De acuerdo a las agresiones relacionadas con el consumo de alcohol, podemos decir que este factor asociado a la violencia, presenta un número elevado de casos de mujeres que son agredidas por sus parejas o cónyuges bajo el efecto del mismo; por lo que podemos considerar éste, un estímulo para que el agresor, en su estado de ebriedad, violenta a su víctima. De ese modo, podemos concluir que existe una asociación negativa entre el exceso de alcohol y la relación de pareja.

Así, la OMS, en su artículo “Violencia infligida por la pareja y alcohol” señala que se ha constatado en muchos países que el consumo de alcohol está estrechamente ligado a la violencia infligida por la pareja. Dicho consumo incrementa la frecuencia y la gravedad del riesgo y los actos de violencia doméstica. Asimismo, Ruiz, Blanco y Vives (2003), explican que, de los diferentes factores estudiados en la violencia dada en el ámbito familiar, es el alcoholismo uno de los más mencionados. Señalan también que son los conflictos de pareja, el dominio del hombre en la economía y la toma de decisiones en la familia, los factores de riesgo que pueden constituir posibles y futuras situaciones de violencia.

Otro de los puntos a considerar en la presente investigación, es que existe una clara tendencia, por parte de la mujer víctima de violencia, a tolerar violencia. Lo mencionado lo podemos corroborar con los porcentajes obtenidos en este estudio; es así que, conforme a las tablas presentadas, se observa que en el 70,9% de los casos se trataba de la primera

agresión sufrida, el 20,7 % se daba por segunda vez y el 8,5% por más de dos veces (TABLA N°03). Son estas cifras, las que nos permiten indicar que las mujeres víctimas de violencia denuncian a su agresor únicamente cuando se trata de reiterados actos de violencia y, esto puede deberse a diversas razones, tales como: no quebrantar la unidad familiar; prefieren permanecer cerca a su pareja y esto a consecuencia de una cultura machista incorporada hace muchísimos años en nuestra sociedad, en la que el hombre es superior y la mujer debe cumplir un rol sumiso y de respeto frente a la autoridad de la pareja; mantener un rol de madre y esposa perfecta, etc. Roco, Baldi y Álvarez (2013), quienes realizaron un estudio en el Subprograma “Mujer y Comunidad”, de una ciudad Argentina, destinado a ayudar a víctimas de violencia, llegaron a la conclusión que un gran porcentaje de mujeres de este grupo presentaron marcada deficiencia en el procesamiento de las emociones vivenciadas y una escasa conciencia emocional; explican también la tendencia a silenciar u ocultar la situación de violencia, no realizando la denuncia pertinente o no solicitando ayuda psicológica o profesional. Otro tema importante, es el referente a las razones de demora que tiene la mujer víctima de violencia para hacer efectiva la denuncia contra su agresor. Debemos hacer hincapié, que toda mujer debe aprender a quererse, respetarse y, sobre todo, cuidarse. Por tal motivo, es imprescindible tener siempre presente que, de darse un acto de violencia por primera vez, es probable que se repita por segunda y tercera vez. La demora para hacer efectiva la denuncia, en algunos casos, es de años y esto solo genera prejuicios a la mujer, como baja autoestima y una de las soluciones más inmediatas es denunciar y parar con el círculo de la violencia.

Aiquipa (2015), en un estudio realizado en el distrito de Oxapampa, en mujeres con edades entre los 18 y 60 años, se determinó que las mujeres que viven o han vivido violencia de pareja, presentan altos niveles de dependencia emocional respecto a aquellas mujeres que no han vivido tal experiencia, explicando que una mujer con dependencia emocional experimentará elevados niveles de miedo al pensar que su relación de pareja pueda terminar. Es por esta razón que evitará, por todos los medios, que eso suceda, pudiendo llegar a tolerar conductas que la denigren como ser humano, desde insultos, humillaciones u ofensas hasta, incluso, agresiones físicas.

La dependencia emocional de la que hacemos referencia en el párrafo anterior, se manifiesta, en las mujeres víctimas de violencia, de dos formas en esta investigación; por un lado, la mujer con dependencia emocional que asume un rol sumiso y se subordina a

su pareja (Aiquipa, 2015), aceptando su posición, sin capacidad de defenderse por temor a que la pareja la agreda o la violencia que ejerza sea aún mayor y, por otro lado, se deja manipular, optando su agresor por victimizarse ante su víctima.

Dentro del trabajo de investigación, encontramos el caso de una mujer joven, estudiante universitaria que es víctima de violencia desde el inicio de su relación, pero ha creado un lazo de dependencia emocional que le impide culminar con este círculo de violencia, aceptando agresiones por parte de su enamorado –quien también es su compañero de estudios- en el ámbito público y privado. Asimismo, debemos precisar que, en la ciudad de Tacna, solo el 1.6% de las denuncias son de mujeres menores de 18 años (TABLA N°2), probablemente debido a que muchas mujeres jóvenes que mantienen una relación de pareja o de noviazgo, no están dispuestas a realizar una denuncia por temor a ser señaladas por una sociedad machista. Medina, Riquer y Castro (2006), en un estudio sobre violencia contra la mujer joven, establecieron que una de las variables más significativa fue la de pertenecer al grupo con un rango de edad de 15 a 19 años, prevaleciendo la violencia económica y física, lo que indica que hay un mayor riesgo de violencia de género entre mujeres jóvenes. Se determinó que la violencia surge a la edad en la que se da el inicio al noviazgo y la edad de la primera unión sexual. Si consideramos que, en la actualidad, las jóvenes inician noviazgos antes de los 15 años y se unen antes de los 25 años, tienen más riesgo de violencia de género. Estos autores mencionan también que la violencia de género guarda amplia relación con la falta de recursos por parte de las mujeres, generando dependencia económica con su agresor. Por otro lado, en el estudio FESAL (2008; citado por Navarro, Velásquez y López, 2014), se constató que casi el 44% de las mujeres salvadoreñas que habían estado alguna vez casadas o acompañadas, habían sufrido maltrato psicológico o verbal, el 24% violencia física y el 12% violencia sexual. Las mujeres menores de 30 años fueron las que registraron una mayor prevalencia en el año anterior al estudio. Del mismo modo, el 56% de las entrevistadas habían sufrido comportamientos dominantes y de control por parte de alguna pareja a lo largo de su vida.

Otro aspecto relevante que se encontró en esta investigación, es el relacionado al lugar al que acude la mujer después de ser agredida, llegando a la conclusión que al primer lugar al que acude la mujer víctima de violencia, para denunciar a su agresor, es la Comisaría (Policía Nacional del Perú) de la zona donde habita, lo que se corrobora con el siguiente testimonio: *“Él me ha pegado, en todo este tiempo de relación existió maltrato, mi hijo discapacitado también fue maltratado por él, los dos pasamos por lo mismo y no se hizo*

justicia, ayer mi agresor salió absuelto. Salió absuelto después de haberme maltratado por un lapso mayor de 2 horas. Yo en todo momento luché por mi vida y luché porque pensaba en mis hijos...”. Este testimonio nos permite evidenciar que la mujer víctima de violencia tiene la percepción que las autoridades son insensibles ante su situación; por ende, no se siente protegida por las mismas. Debemos recalcar que el propósito principal de la mujer que realiza su denuncia va más allá de una simple sanción o pena para el agresor, implica solicitar a las autoridades competentes que se le dé protección efectiva para no seguir siendo agredida. Esta situación de desatención e indiferencia del entorno frente a los casos de violencia contra la mujer, hace que el hombre agresor afiance su autoridad masculina-abusiva; por tal motivo, no teme a posibles y futuras sanciones legales. Evidentemente, podemos observar que el acceso a la protección que debe brindar el Estado, y que buscan las mujeres al denunciar a su agresor, no satisface las necesidades ni las expectativas de las mismas. Arriola (2008), señala que la normativa internacional, que debe ser incluida al investigar los casos de violencia familiar, es la protección de una serie de derechos como el derecho a la vida, integridad personal (que incluye la integridad psíquica o psicológica), salud, entre otros que pueden verse afectados y, que el Estado peruano está obligado a hacer prevalecer para que la mujer pueda ejercerlos, como el derecho de acceso a la justicia y el de la debida diligencia al investigar los hechos de violencia. De ese modo, la violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas: violencia física, sexual y/o psicológica, es un problema social que no solo lesiona los derechos humanos de las víctimas directas sino que afecta al resto de la sociedad y al mismo Estado; en consecuencia, se considera de suma importancia que la legislación nacional tenga en cuenta lo que se entiende por “salud”, ya que, como es de conocimiento, toda persona tiene derecho a gozar de un estado de completo bienestar, libre de violencia.

Son algunos testimonios de mujeres víctimas de violencia, los que nos permiten notar la importancia de una definición clara y precisa de “SALUD” en nuestra legislación: *“Al haber hecho la denuncia, de una agresión física a la policía, lo que me dijeron fue que debía pasar el examen médico legal y así fue; sin embargo, no salió ninguna evidencia, no se presentó ninguna lesión en ese momento y entonces ¿qué paso?, la policía me dijo que se comunicaría conmigo”,* tenemos también el testimonio de otra mujer violentada que manifestó: *“Me llegó una carta que indicaba que el examen médico legal había salido negativo y que el caso se había archivado, esto indica que no tomaron en cuenta lo que yo les había dicho que días anteriores había ocurrido. He vivido dos años con mi*

pareja, y en los exámenes tomados, se debió evidenciar violencia psicológica; pero así pasa, el caso se archivó...”; con lo mencionado, se hace evidente lo señalado por Arriola (2008), la necesidad que la legislación sobre violencia contra la mujer, considere lo que implica “SALUD”, ya que toda persona tiene derecho a gozar de manera plena y libre de ésta, sin temor a ser agredido, porque debemos señalar que por mínima que parezca la agresión, colisiona con este derecho. Tal y como establece la OMS (1948) “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Las diversas entrevistas y la casuística del año 2016, nos permite afirmar que las autoridades reconocen únicamente la violencia física, restándole importancia a la violencia verbal y psicológica. Esto, indudablemente, transmite un mensaje de incapacidad por parte de las autoridades de sentirse conmovidos o afectados frente a los casos presentados por mujeres víctimas de violencia; de modo tal que recibir protección por parte de los mismos es poco probable, manteniendo la mujer un estado de riesgo inminente. Frente a ello, para la CIDH (2006) es evidente la necesidad que los Estados diseñen y fortalezcan programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia, Policía, sobre el problema de violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos y su obligación de ofrecer un trato digno y humano a las víctimas cuando intentan acceder a instancias judiciales. Por otro lado, señala que, a pesar de la proliferación de programas de capacitación orientados a funcionarios de la administración de justicia y Policía, la CIDH ha verificado que el impacto de éstos ha sido heterogéneo, que muchos de ellos carecen de la institucionalización y de los mecanismos de responsabilidad necesarios para poder lograr cambios sostenibles.

Por otra parte, logramos identificar que una de las dificultades que se le presenta a la mujer víctima de violencia es que, en algunas ocasiones, no tiene al alcance su Documento Nacional de Identidad (DNI), no pudiendo acceder a determinados servicios, pues debe cumplir con la formalidad requerida, es decir, debe identificarse. Este hecho, además de generar indignación, es un atentado a los derechos humanos de la mujer y una clara infracción legal, ya que el artículo 16 del Reglamento de la Ley N° 30364, menciona que al tratarse de víctimas y personas denunciantes no se requiere presentar el DNI para acceder a registrar sus denuncias. La Institución receptora verifica dentro del Sistema Integrado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) la identidad de la persona denunciante. Cabe resaltar que RENIEC otorga facilidades para acceder al

registro de identidad de personas de todas las edades a todas las instituciones públicas receptoras de denuncias por hechos de violencia.

De acuerdo a los casos analizados en el presente trabajo, se observa que la primera barrera para que los operadores de justicia cumplan con el propósito jurídico de auxilio a la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, es la escasa concientización sobre el tema de violencia contra la mujer. Logramos evidenciar que la policía desconfía de lo narrado por las mujeres que denuncian agresión de pareja, probablemente por una serie de prejuicios, abundante carga laboral, dudas respecto al sostenimiento de la denuncia por parte de la mujer denunciante o, simplemente, porque no están capacitados para atender este tipo de casos. Esta falta de capacitación o entrenamiento, puede estar relacionada a la falta de conocimiento sobre cómo presentar el informe correspondiente ante el Juzgado, ya que algunas mujeres víctimas de violencia - denunciantes señalan que sus casos no han sido debidamente presentados por la Policía, razón por la cual han sido archivados, no teniendo ningún tipo de protección. En este sentido, para la CIDH (2006) los programas de gobierno existentes, que tienen por finalidad ofrecer servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia y hacer que las mismas ejerzan sus derechos en el ámbito de justicia, presentan una serie de fallas en su funcionamiento, no prestando los servicios multidisciplinarios necesarios a las víctimas. A su vez, la CIDH afirma que, entre los problemas identificados, se destacan la falta de coordinación y colaboración entre los programas, diversas deficiencias en la provisión de servicios interdisciplinarios requeridos por las víctimas, falta de recursos para hacer sostenible su funcionamiento y su limitada cobertura geográfica, lo que afecta de manera crítica a las mujeres que habitan en zonas marginadas, rurales y de extrema pobreza. Del mismo modo, la Comisión destaca la necesidad de legitimar, proteger y apoyar la labor de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios interdisciplinarios a las mujeres víctimas de violencia, a través de recursos financieros y políticas públicas, especialmente en lo referido a la provisión de información sobre la forma de interponer denuncias ante actos de violencia contra las mujeres y cómo acceder a una tutela judicial efectiva. Es así, que, en este estudio, ninguna de las mujeres acudió o recibió ayuda de una organización no gubernamental, destinada a prestar servicios a mujeres víctimas de violencia, por no tener conocimiento de la existencia de éstas en la ciudad de Tacna.

Si bien es cierto, es importante que las autoridades tengan conocimiento sobre protocolos de atención frente a denuncias por agresión a mujeres, es igual de importante que tengan

entrenamiento en lo referente a habilidades sociales, para tener la capacidad de ser empáticos, es decir, puedan ponerse en el lugar de la víctima o denunciante. La labor del operador de justicia debe centrarse en dos aspectos: brindar seguridad a la denunciante y, en esa medida, prestarle la ayuda necesaria. Y, de acuerdo a los expedientes analizados, éstos dos aspectos no se cumplen, ya que las mujeres víctimas de violencia no reciben las medidas de protección necesarias para salvaguardar su bienestar en el tiempo que la norma lo indica; los porcentajes obtenidos, nos permiten afirmar que sólo el 15,7% de mujeres que presentan su denuncia por violencia, reciben las medidas de protección en un máximo de 3 días, mientras que el 79,3% en un periodo de hasta 30 días.

Conforme las entrevistas a los operadores de justicia, se concluye que algunos reconocen que el problema de violencia contra la mujer es un problema de salud pública y, sin duda, tienen conocimiento de la promulgación de la nueva Ley N° 30364 y su reglamento. Si bien reconocen los aspectos positivos de la nueva normativa, observan que en la misma existen diversas dificultades, las que impiden su total aplicación, entre ellas: falta de infraestructura, personal, capacitación adecuada. Asimismo, mencionan dos cambios importantes con respecto al trato legal antes de la promulgación de la ley en mención, como el hecho que la Fiscalía Penal sea la encargada de estos casos, y ya no la Policía (salvo casos de menores de edad, en donde interviene la Fiscalía de la Familia). De acuerdo a la LEY N° 30364 “LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR”, Díaz (2016) menciona que en el Perú hemos logrado verdaderos avances, debido a la reacción mundial de violencia de género, lo que en algunos países no ha pasado de ser un intento normativo de desprotección a la mujer víctima de violencia; sin embargo, en nuestro país el objetivo de la promulgación de dicha ley ha sido dar verdadera protección a las víctimas de violencia y los integrantes del grupo familiar. Con esta ley, se pretende prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia, producida en el ámbito público o privado, contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, específicamente las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Como consecuencia, se establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a las víctimas, así como la debida reparación por el daño causado; se dispone también la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

De los tipos de violencia denunciados, podemos decir que la mayoría de casos es por violencia física-psicológica (41,7%); en segundo lugar, violencia psicológica (33,5%) y, en tercer lugar, violencia física con un 24,4% (TABLA N°11).

El sistema de justicia que existe en la región Tacna no protege de manera adecuada a la mujer víctima de violencia, pues no vela por resguardar su dignidad y privacidad durante el proceso de investigación de la denuncia. Se logró evidenciar que en algunos casos, las participantes de este estudio han sufrido de revictimización, debido a varias razones: confusión ante las competencias de cada operador de justicia, lo cual es congruente con la falta de capacitación o formación adecuada para tratar casos específicos de violencia contra la mujer y no contar con infraestructura implementada para recibir a una mujer víctima de violencia que desea denunciar el abuso para garantizar que su caso siga el proceso correspondiente, respetando su dignidad. Para Salvador (2015), la violencia ejercida contra las mujeres es el símbolo más brutal de desigualdad, por razón de género, existente en nuestra sociedad, además de una grave vulneración de los derechos de las mujeres y un mal funcionamiento del sistema de justicia que, debería proteger los derechos de las víctimas, no provocando una victimización secundaria, es decir, generar a la víctima un daño o un perjuicio adicional a los derivados de la comisión del delito. Por esta razón, consideramos que no basta con promulgar una nueva Ley contra violencia de género, sino que es necesaria su implementación a través de diversos mecanismos, como la creación de juzgados especializados dirigidos a mejorar la ayuda y protección a las víctimas.

Alarcón (2016) señala la necesidad de tener equipos profesionales y funcionales de atención especializada y de entrenamiento, para el desarrollo de habilidades, logrando actuaciones, en el sistema judicial, que no busquen victimizar a la mujer que acude a realizar su denuncia. Alarcón manifiesta que el rol del Estado no es intervenir únicamente para evitar el riesgo de la víctima en el momento de la agresión sino, por el contrario, hacer que los operadores de justicia desarrollen capacidades que garanticen una protección integral, pues se trata de personas con necesidades, que requieren un trato especial por su misma condición. Sin embargo, debemos considerar también que para asegurar el bienestar de la mujer agredida y de futuras parejas, el agresor debe ser atendido y recibir terapia adecuada. Es así, que en los testimonios de las mujeres víctimas de violencia de este estudio, se observa que las mismas manifiesta que sus agresores precisan asistencia médica. El artículo 94 del Reglamento de la Ley N° 30364, señala que

el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe realizar acciones de coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Locales y Poder Judicial, con el objetivo de implementar los procesos de intervención para la reeducación de personas sentenciadas por actos de violencia contra la mujer; asimismo, encontramos el artículo 95, que menciona la importancia de programas de reeducación, que tienen como objetivo brindar, a través de servicios especializados, herramientas y recursos a personas agresoras de mujeres, para que puedan adquirir nuevas conductas y estándares de comportamiento, ambos basados en trato igualitario y respeto al derecho a una vida libre violencia.

Por otro lado, las mujeres encuestadas, tienen la percepción que el Estado no cumple con proteger sus derechos fundamentales. Las mujeres víctimas de violencia, que han realizado la respectiva denuncia por hechos de agresión, han observado la hostilidad del sistema judicial, que no les brinda apoyo jurídico ni les informa sobre el proceso, discriminación de género y social, cuestionamiento y descalificación de su denuncia, falta de empatía, dilatación del proceso, lo que genera dudas respecto a obtener justicia. Para Beristain (1996; citado por Padilla, 2016), la victimización secundaria, como forma de violencia institucional, hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia, aunque, debemos precisar, dicha revictimización no se produce de manera exclusiva por los agentes del Estado. De hecho, puede darse fuera de lo que es considerado el proceso penal, produciéndose en distintos momentos y agentes; En otras palabras, la victimización secundaria implica todos aquellos daños o perjuicios psicológicos, sociales, judiciales o económicos que se producen de manera posterior al delito, por ejemplo, tener que realizar diferentes declaraciones, explicando los hechos una y otra vez, reviviendo la situación de violencia sufrida. Consideramos, entonces, que la revictimización es consecuencia de las malas o inadecuadas prácticas provenientes de las instituciones, es decir, la victimización secundaria es resultado directo, aunque no exclusivo, de violencia institucional, la que se expresa a través de acciones u omisiones del Estado. Según Frías (2014), la violencia contra las mujeres es multidimensional y multifacética, se presenta violencia en la familia, ámbito escolar, laboral e institucional. La última es aquella que, por acción u omisión, genera el Estado, cuando los operadores de justicia dilatan, obstaculizan el acceso a justicia de las mujeres víctimas de violencia.

De modo que el sistema integrado de manejo de la denuncia, canalización a través de la red de operadores de justicia tiene falencias en el distrito de Tacna; por lo que vienen ocurriendo acciones u omisiones identificadas como actos de violencia.

Una omisión importante del Estado, de acuerdo a los testimonios de operadores de justicia, es que no existen refugios para albergar a las mujeres que denuncian violencia, lo que, sin duda, dificulta la función del Estado de brindar protección. La Ley N° 30364, en su artículo 29, señala que es política permanente del Estado, la creación de hogares de refugio temporal. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene el deber de implementar y administrar el registro de este tipo de hogares, cumpliendo con los estándares de calidad. Los gobiernos locales, provinciales, distritales, regionales y las instituciones privadas que gestionen y administren hogares de refugio temporal, facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Después de interpretar y realizar el análisis a los resultados obtenidos, no cabe duda que la Ley N° 30364 representa un gran avance en la legislación peruana y, específicamente, en el tratamiento de la violencia contra la mujer; sin embargo, aún presenta algunas deficiencias. La ley en mención tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales. Asimismo, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos (artículo 1). Y, cuenta con un Reglamento y “Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021” que la respalda.

Su desarrollo se basa en seis principios rectores: 1) De igualdad y no discriminación; 2) Del interés superior del niño; 3) Principio de la debida diligencia; 4) De intervención inmediata y oportuna; 5) De sencillez y 6) De razonabilidad, principios que desarrollaremos más adelante.

Lo mencionado evidencia los cambios de la Ley N° 30364, siendo otro de ellos el reconocimiento de la violencia contra la mujer por razones de género, lo que denota la intención del Estado de adecuarse a los convenios internacionales, pues adopta el

concepto de violencia de la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención - Belém do Pará y su obligación frente a las agraviadas, a las que se les reconoce sus derechos de manera explícita (artículo 10). Por otro lado, la nueva ley reconoce cuatro tipos de violencia: física, psicológica, económica y sexual; del mismo modo, añade que la violencia contra la mujer no se da únicamente en el ámbito familiar, sino que la misma puede desarrollarse en el ámbito laboral y de estudios, por lo que reconoce los derechos de la mujer en ambos campos (artículo 11 y 12, respectivamente).

Una mujer que es víctima de violencia, requiere protección por parte del Estado, por lo que es necesaria la emisión de medidas de protección; sin embargo, en la ley anterior, Ley N° 26260 – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, el tema procesal se dilataba, pues los fiscales de familia derivaban el tema a los fiscales penales, quienes, a su vez, solicitaban la emisión de éstas medidas al juzgado. Con la nueva Ley, existe un gran cambio al respecto, ya que, una vez realizada la denuncia, es deber de la Policía Nacional presentar un informe al Juzgado de Familia o el competente en un plazo de 24 horas y es obligación de éste juzgado otorgar las medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, garantizando el bienestar de la víctima. Se puede considerar este cambio el más importante, pues de acuerdo a los plazos establecidos, se debería dar atención inmediata a los casos de violencia, dando cumplimiento a la etapa de protección que prevé la norma y que está a cargo del Juez de Familia, en un proceso especial y realmente rápido.

Resaltando los cambios de la Ley y teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, podemos decir que si bien los cambios de la ley son positivos, es importante recalcar que éstos deben ser efectivos en la práctica, pues al momento de ejecución aún existen falencias, dándose únicamente cumplimiento parcial a lo establecido en la ley, y esto a consecuencia de informes policiales deficientes que generan medidas de protección que no se ajustan a la realidad, es decir, a la verdadera necesidad de la víctima y no cumplen con sus características básicas. Granados y Jiménez (2008) considera características de las medidas de protección, las siguientes: 1) Congruentes; 2) oportunas; 3) no requieren de prueba; 4) Provisionales; 5) obligatorias; 6) perentorias; 7) inmediatas; 8) tutelares; 8) prorrogables; 9) personalísimas; 10) irrenunciabiles; 11) variables; 12) deben proteger ante situaciones de riesgo; 13) accesibles y 14) no producen cosa juzgada.

Por tal motivo, la tutela judicial debe ser orientada a la tutela de prevención a través de la emisión de medidas de protección eficaces y bajo seguimiento, el que está a cargo de la Policía Nacional del Perú, tal como se establece en el artículo 47 del Reglamento de la Ley N° 30364.

La hostilidad del sistema judicial, el cuestionamiento y descalificación de la denuncia de la mujer víctima de violencia, discriminación, la dilatación del proceso y la demora en dictar las medidas de protección (TABLA N°15), nos permite afirmar que no se está cumpliendo con la Constitución Política, los principios rectores de la Ley N° 30364, detallados en el artículo 2 y, por ende, con los convenios internacionales, compromisos que son vinculantes para el Estado peruano, es decir, de cumplimiento obligatorio.

La Constitución, en el numeral 3 del artículo 139, considera dentro de los principios y derechos de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional, lo que implica el derecho de toda mujer víctima de violencia de acceder a justicia.

César Landa señala que “el acceso a la justicia garantiza que cualquier persona pueda recurrir a un tribunal de justicia, de manera directa o a través de un representante para que, con un proceso respetuoso de garantías mínimas, se sustenta una pretensión de orden penal, civil laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”²⁶.

En el Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el punto 5, se define el acceso a la justicia “como el acceso de jure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos. La CIDH ha establecido que un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. (...) Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad”²⁷.

²⁶ Cfr. Landa, César 2012:15

²⁷ Cfr. OEA – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” 2007:3.

Del mismo modo, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, establece dentro de sus objetivos estratégicos: uno de prevención, que implica un cambio sociocultural y otro dirigido a las responsabilidades del Estado, destacando entre ellas el acceso a justicia por parte de la víctima de violencia.

Por otro lado, Priori (2014) citado por Omar Sumaria señala que “El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías (...)”. Asimismo, Sumaria señala que “dicho concepto, abarca los grados de este derecho, que a saber son, una tutela jurisdiccional en primer grado que comprende el acceso a la jurisdicción, una tutela jurisdiccional en segundo grado que comprende el obtener una respuesta que resuelva el conflicto y que esté fundada en derecho; y una tutela jurisdiccional de tercer grado que exige que ésta respuesta que otorga el órgano jurisdiccional sea susceptible de ser ejecutada (...)”²⁸.

De acuerdo a lo mencionado, podemos decir que la presente investigación evidencia que las mujeres víctimas de violencia cuando realizan una denuncia no logran tener acceso efectivo a justicia, ya que el órgano jurisdiccional, encargado de dictar las medidas de protección, no las emite en el momento oportuno, incumpliendo con lo establecido en la Ley.

Tenemos también los principios que menciona el artículo 2, considerando relevantes, para el tema de violencia contra la mujer, los siguientes:

Principio de igualdad y no discriminación

Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.

²⁸ Cfr. Sumaria, Omar 2009: 6

Principio de la debida diligencia

El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este principio.

Principio de la intervención inmediata y oportuna

Los operados de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación, por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.

Principio de sencillez y oralidad

Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados.

Principio de razonabilidad y proporcionalidad

El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es preciso mencionar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que en su artículo 8, referente a garantías judiciales, señala en el numeral 1 que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier

otro carácter”. Lo mencionado evidencia la obligación de los Estados Parte de asegurar el acceso a justicia a través de recursos sencillos y eficaces que amparen a la mujer frente a actos de violencia, protegiendo sus derechos. Asimismo, se encuentra que en el artículo 25 del mismo cuerpo normativo, se establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Sin duda, las garantías judiciales y la protección judicial son la base de la defensa y respeto de los derechos humanos que señala la misma Convención, asegurando un debido proceso.

Por otro lado, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – Belém do Pará (1994), en su Capítulo II, Deberes de los Estados, establece en el artículo 7 que los Estados Partes deben: actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (literal b); establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (literal f); y, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (literal g).

Al incumplir las normas señaladas, se observa las deficiencias del sistema judicial para brindar protección a la mujer, pues su retraso excesivo y, en muchos casos, injustificado, termina siendo un obstáculo para hacer efectiva la debida diligencia y combatir la impunidad y al no combatirla, se envía un mensaje de aceptación y tolerancia frente a la violencia, lo que genera inseguridad en muchas mujeres, haciéndolas desertar de denunciar e iniciar un proceso contra su agresor.

Se debe hacer hincapié en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera de suma importancia el principio de Debida Diligencia; es así que en el punto 27 de su informe “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” y haciendo referencia a lo dicho en la Sentencia del 7 de febrero de 2006 respecto al Caso

Acevedo Jaramillo y otros, indica que “Los Estados deben actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad”²⁹.

Los Estados Partes, en muchos casos, no cumplen con lo previsto en las convenciones mencionadas, respecto a la debida diligencia, es así que se han visto casos emblemáticos como el de María da Penha Fernandes (Brasil) y Valentina Rosendo Cantú (México).

María da Penha Fernandes³⁰ fue víctima de doble intento de homicidio por su entonces esposo. La primera vez, le disparó por la espalda mientras dormía, causándole paraplejía irreversible y otros daños a su salud; la segunda, intentó electrocutarla en el baño (1983). 15 años después de lo ocurrido, en 1998, su agresor permanecía en libertad, si bien existían dos condenas en su contra, no había una decisión definitiva. Por tal motivo, se lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien señala responsable al Gobierno Brasileiro, por no tomar las medidas necesarias para sentenciar a los agresores. Es así que, en respuesta, el Gobierno Brasileiro promulga la Ley Maria da Penha sobre Violencia Doméstica y Familiar el 2006.

Por otra parte, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú³¹, perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, quien a los 17 años fue abordada por un grupo de 8 soldados, golpeada y violada por 2 de ellos. Después de pasar el caso de un lado a otro, entre el Ministerio Público y los Tribunales Militares, se resolvió finalmente que no se acreditó la comisión del delito. Siete años después, se realiza la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dándose recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta por el Estado Mexicano, pasando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se resolvió que el Estado Mexicano era responsable por la violación de derechos fundamentales y las garantías y protección judiciales.

En ambos casos se observa un Estado negligente y los numerosos obstáculos que tiene la mujer víctima de violencia para acceder a la justicia. Si bien éste trabajo de investigación se enfoca en la protección del Estado a la mujer víctima de violencia hasta la obtención

²⁹ Cfr. OEA – Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas” 2007: 12.

³⁰ Cfr. OEA – Comisión interamericana de Derechos Humanos. “Informe N° 54/01”.

³¹ Cfr. Corte Interamericana de Derecho Humanos. “Caso Rosendo Cantú y otra vs. México” Sentencia de 31 de agosto de 2010.

de medidas de protección, el hecho de no emitirlas en el plazo máximo de 72 horas establecido por Ley, entorpece y dilata el proceso y el agresor no es sancionado como corresponde, generando riesgos mayores para la víctima y pudiendo terminar el caso en un feminicidio, la más grave forma de violencia.

CAPÍTULO V

PROPUESTA

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, evidencian las dificultades de los operadores de justicia, para afrontar los retos de la Ley N° 30364 que, como ya mencionamos, tiene grandes avances y se ajusta a los compromisos asumidos por nuestro país con las diferentes convenciones internacionales, pero no se adecua a la realidad de nuestro país.

No se ha previsto un presupuesto para la implementación que implica la promulgación de la Ley, es decir, el Estado no ha dotado la logística necesaria para que no se genere resultados negativos y se pueda tolerar el impacto que esta Ley iba a causar, sobre todo por el tema de plazos. Sin duda, un estudio preliminar del sistema judicial y las entidades estatales, hubiese permitido saber si una ley tan innovadora se iba a poder aplicar en el Perú. Sin embargo, lo que se debe hacer ahora, es poner en práctica el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional contra la Violencia de Género. El monitoreo, vigilancia permanente, registro de información, evaluación periódica, permitirán determinar cómo se está avanzando, el resultado e impacto de acciones y los cambios que se necesitan para trabajar en estrategias que conlleven al impacto deseado.

La Policía Nacional no está preparada para afrontar éste problema social que aqueja a la población de la Región Tacna, considerando el alto índice de denuncias que existe y la falta de capacitación en temas de violencia de género. Éstas deficiencias tienen como resultado los ineficientes informes que se presenta al Juzgado de Familia y el trato, en muchos casos, inadecuado con las víctimas. Por otro lado, se evidencia lo dificultoso que resulta hacer el respectivo seguimiento, para la ejecución de medidas de protección, una vez que el Juzgado las haya emitido, pues no se cuenta con personal suficiente, acceso a

llamadas ni movilidad. Se debe considerar también que, realizada la denuncia, la Policía Nacional tiene 24 horas, para presentar el informe al Juzgado; sin embargo, el plazo otorgado por ley resulta corto para recabar la información que se requiere y tampoco se ha previsto los casos en que la Policía no logre completar la información establecida para el atestado en el plazo señalado.

Por tal motivo, considero de suma importancia que se realice una modificación al artículo 15 de la Ley, quedando de la siguiente manera:

Artículo 15: Denuncia

La denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos.

La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación debe denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad.

Cuando la Policía Nacional del Perú conozca de casos de violencia contra a mujer a los integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías del ámbito nacional, debe poner los hechos en conocimiento de los juzgados de familia o los que cumplan sus funciones dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS de conocido el hecho, remitiendo el atestado que resuma lo actuado.

Las medidas de protección buscan satisfacer las necesidades urgentes de protección de la mujer víctima de violencia; por lo que, los operadores de justicia deben ser más específicos al otorgarlas. Es de suma importancia el fortalecimiento de competencias de los jueces, su capacitación constante y la creación de un Juzgado Especializado en Violencia contra la Mujer, sólo así se evitará la acumulación de casos y, por ende, la dilatación de plazos.

La normativa internacional debe ser considerada en los casos de violencia contra la mujer; sin embargo, en los casos analizados no se invocó ninguna normativa internacional.

CONCLUSIONES

1.- De acuerdo al objetivo central de esta investigación, podemos concluir que la mujer víctima de violencia en el ámbito familiar, del distrito de Tacna, si bien recibe las medidas de protección por parte de los operadores de justicia, las mismas no siempre son dictadas en el plazo establecido por Ley, correspondiente a 72 horas. Esto se corrobora con los porcentajes obtenidos, los que indican que el 99,6% de las mujeres que han denunciado violencia contra sus agresores, recibieron medidas de protección de parte de organismos del Estado (TABLA N°13); sin embargo, conforme al tiempo para que se otorguen luego de presentada la denuncia, éste supera el plazo establecido (TABLA N° 15), pues evidenciamos que únicamente el 15,7% de ellas son atendidas en menos de 3 días; mientras que el 79,3% se atiende en un período de hasta 30 días.

2.- Dentro del perfil sociodemográfico de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, del distrito Tacna, se puede esbozar los siguientes rasgos: no cuenta con una sólida red familiar de apoyo, no tiene un nivel de racionalidad para percibir que vive una situación de riesgo grave; siente miedo a las agresiones, vergüenza frente a su entorno por la situación que vive; experimenta sentimiento de culpabilidad, justificando a su agresor. Respecto a la edad, se observa que las mujeres víctimas de violencia, que denuncian a su agresor, tienen entre 18 y 50 años (85%); la mayoría de ellas viven en el distrito Gregorio Albarracín (32,9%), en segundo lugar, en el cercado de la ciudad (25,4%) y, en tercer lugar, en el distrito Alto de la Alianza (14,9%)

3.- El tipo de violencia que denunciaron mayoritariamente las mujeres maltratadas han sido de violencia física-psicológica (41,7%); en segundo lugar, violencia psicológica (33,5%) y, en tercer lugar, violencia física (24,4%).

4.- La ruta que adopta la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, se inicia en la Comisaría de la zona donde vive. Es ésta entidad la que realiza la derivación correspondiente a medicina legal e informa del caso a la fiscalía de familia. Son pocos los casos en los que las mujeres víctimas de violencia, inician la ruta de denuncia en el Centro de Emergencia Mujer de Tacna.

5.- La respuesta de los organismos del Estado frente a las quejas presentadas por parte de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna, no es la más adecuada, ya que se vienen presentando una serie de dificultades y barreras que, de alguna forma, determinan la calidad de su respuesta. De acuerdo con las versiones de los operadores de justicia, estas barreras son: falta de infraestructura, personal y capacitación del personal, para implementar la Ley N° 30364 “Ley Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. En consecuencia, los organismos del Estado no vienen efectivizando al 100% los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas que la ley expresa. Respecto a las necesidades de capacitación del personal, se debe considerar que las mujeres víctimas de violencia que han efectivizado su denuncia, requieren apoyo de los operadores de justicia, asesoramiento sobre el tratamiento de su caso, escucha activa, trato cálido y empático, para que pueda tomar decisiones adecuadas frente a su situación.

6.- El grado de articulación de las diversas instituciones que brindan protección a la mujer víctima de violencia, en el distrito Tacna, no es óptimo. Así, durante el proceso de investigación de la denuncia, en algunos casos, las mujeres que denuncian a sus agresores, han sufrido revictimización, sobretudo, en los casos en que mujeres han realizado más de una denuncia contra su agresor. Cada una de estas denuncias, se convierte en un nuevo caso debido a que los niveles de conexión de información entre la Policía Nacional, Fiscalía de Familia y Juzgado de Familia, no son adecuados. Esto favorece al agresor, ya que le permite dilatar el proceso de acusación y finalmente, no ser sancionado; y a la mujer víctima de violencia, no le permite recibir la protección que la Ley establece.

RECOMENDACIONES

1.- Es necesario capacitar a los operadores de justicia, para evitar que las resoluciones que emitan violen los derechos humanos de las mujeres víctima de violencia que realizan su denuncia y, se implemente también los mecanismos necesarios para que el agresor pueda ser resocializado.

2.- Realizar un análisis de la Ley N° 30364 “Ley Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, a la luz de haber transcurrido 2 años y medio de su promulgación, para poder hacer las modificaciones que ésta pudiera requerir y que se ajuste a la realidad actual de nuestro país.

3.- Es necesario que los centros de educación superior consideren competencias relacionadas a la violencia de género en la formación de los profesionales que se desempeñaran como operadores de justicia en los diferentes organismos del Estado, en casos de violencia contra la mujer y violencia familiar. Competencias que les permitan a dichos profesionales contar con capacidades de atención con enfoque de género.

BIBLIOGRAFÍA

II. TEXTOS LEGALES Y TRATADOS

1. PERÚ. Presidente de la República (1978) Decreto Ley N° 22128: Aprueban Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos originado en la ONU.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
3. PERÚ. Presidente de la República (1978) Decreto Ley N° 22129: Adoptan Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aceptado por la ONU.
4. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
5. PERÚ. Presidente de la República (1978) Decreto Ley N° 22231: Aprueban “Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
7. Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer – CEDAW (1979)
8. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer – Belém do Pará (1994).
9. CEDAW, Recomendación General N° 19: La Violencia contra la Mujer (1992).
10. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
11. PERÚ. Congreso de la República (1993) Ley N° 26260: Ley de Protección frente a la Violencia Familiar.
12. PERÚ. Congreso de la República (2015) Ley N° 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
13. Constitución Política del Perú (1993).
14. PERÚ. Congreso de la República (1959) Resolución Legislativa N° 13282: Aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos.

II. TEXTOS MONOGRÁFICOS Y ARTÍCULOS

15. ALVAREZ, Militza y otros (2010) Violencia Trans e Intergeneracional en madres con hijos adolescentes en tres ciudades de la Sierra peruana, pp. 9-18. En: Anales de Salud Mental, vol. XXVI (1).
16. LAFAURIE-VILLAMIL, María Mercedes (2015) Violencia de la pareja íntima durante el embarazo y sus repercusiones en la salud mental, pp. 100-116. En: Ciencia y Cuidado, vol. 12, No. 2.
17. ASENCIOS-GONZALES, Zaida (2015) Costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el emporio comercial de Gamarra en Lima-Perú: 2014, pp. 7-39. En: revista de Ciencias Empresariales de la universidad de San Martín de Porres, vol. 6, No. 2.
18. BRAVO, Cinthya y DE LA CRUZ, Jorge (2016) Análisis de Campañas Gráficas sobre Violencia de Género. Propuesta alternativa, pp. 400-412. En: revista PAIAN, vol. 7, No. 2.
19. SILVA.FHON, Jack (2015) Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, Perú, pp. 367-375. En: revista de la Facultad de Medicina, vol. 63, No. 3.
20. RAMOS, Adriana (2015) Femicidio: Un análisis criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres (tesis doctoral en Ciencia Política) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
21. KU, Susana (2009) Violencia de Género durante la gestión y su repercusión en el parto y el recién nacido. Hospital María Auxiliadora, pp. 29-44. En: revista Peruana de Obstetricia y Enfermería, vol. 5, No. 1.
22. LENA, Mona y RESTREPO, Sanín (2016) Género y violencia política en América Latina: conceptos, debates y soluciones, pp. 127-162. En: revista Política y gobierno, vol. XXIII, No. 1.
23. ROJAS, Edelmira (2011) Violencia Intergeneracional de madre a hijo adolescente en cinco ciudades de fronteras del Perú: Bagua, Puerto Maldonado, Puno, Tacna y Tumbes, 2005, pp. 22-28. En: revista Anales de Salud Mental, vol. XXVII, No. 2.
24. MEJÍA, Ulises (2015) Lesiones por violencia familiar en el Reconocimiento Médico Legal (RML), pp. 21-29. En: revista Horizonte Médico, vol. 18, No. 12.
25. BELTRÁN, Cecilia (2014) Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: análisis de la viabilidad de diecisiete planes regionales de igualdad de oportunidades en el Perú, en el periodo 2006-2010, pp. 75-101. En: revista de Ciencia Política y Gobierno, vol. 1, No.1.

26. GARCÍA, Ruth (2017) Violación y Masculinidad: Representaciones de lo masculino en varones reclusos por ejercer violencia sexual en el establecimiento penitenciario de Cañete (tesis de maestría en Estudios de Género). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
27. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2016) Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011-2015. Lima: INEI.
28. PRIORI, Giovanni (2014) Del derecho de acción a la efectiva Tutela Jurisdiccional de los Derechos, pp. 146-161. En: revista IUS ET VERITAS, N° 49.
29. SAYAY, José Feliciano (2015) La necesidad de reformar la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, en relación al nuevo proceso de juzgamiento (tesis de grado, previa a la obtención del título de abogado). Loja: Universidad Nacional de Loja de Ecuador.
30. SECRETARIA DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (2006) Poner fin a la violencia contra la mujer. De las palabras los hechos.
31. CABANELAS, Guillermo (2003) Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta.
32. FLORA TRISTÁN (2005) La violencia contra la mujer: Feminicidio en el Perú. Flora Tristán: Lima.
33. GONZALES, Belén (2016) Prevención de la violencia contra la mujer entre familiar del Programa Social Juntos a través del arte (tesis para optar el título de Licenciado en Historia y Gestión Cultural) Piura: Universidad de Piura.
34. CÁRDENAS, Eduardo (2011) Violencia en la pareja: Intervenciones para la paz desde la paz. Buenos Aires: Granica.
35. ARRIOLA, Inés (2013) Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar nacional. ¿Decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de género? Análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima entre septiembre – diciembre 211 (tesis de maestría en Derechos Humanos). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
36. GONZALES, Evelyn (2015) Asociación entre violencia contra la mujer en relación de pareja y el nivel de riqueza, Perú 2013 (tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
37. PRADA, Andrea (2012) Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: Una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación de la mujer es posible

salir de las dinámicas internacionales violentas (tesis de maestría en Psicología clínica – enfoque sistémico). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

38. RAMOS, Cariño (2013) Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros de Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y comas durante los años 2008-2010 (tesis para optar el grado de Magíster en Gerencia Social). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
39. DE LUJAN, María (2013) Violencia contra las mujeres y alguien más... (tesis doctoral en Filosofía del Derecho, Moral y Política). Valencia: Universitat de Valencia.

III. ARTÍCULOS E INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

40. NACIONES UNIDAS (2011) Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos: Violencia contra las mujeres (consulta: 22 de febrero de 2018). (http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_VAW_WEB_SP.pdf)
41. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) (<https://www.mimp.gob.pe>) Sitio web oficial del MIMP; contiene información sobre el ministerio y violencia contra la mujer (consulta: 18 de diciembre 2017).
42. CÓRDOVA, Ocer (2017) La violencia económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito familiar (consulta: 3 de enero de 2018). (http://www.unife.edu.pe/facultad/derecho/familia/publicaciones/REVISTA_PERSONA_Y_FAMILIA_2017/LA%20VIOLENCIA%20ECON%20C3%93MICA%20Y.O%20PATRIMONIAL%20CONTRA%20LAS%20MUJERES%20EN%20EL%20C3%81MBITO%20FAMILIAR.pdf)
43. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2002) Informe sobre la violencia y la salud: resumen (consulta: 19 de noviembre de 2017). (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43431/9275324220_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1)
44. YUGUEROS, Antonio (2014) La violencia contra las mujeres: conceptos y causas (consulta: 15 de enero de 2018). (<http://www.redalyc.org/pdf/3221/322132553010.pdf>)

45. FERNÁNDEZ, Marisol y otros (2008) Libres de violencia (consulta: 2 de febrero de 2018). (https://www.demus.org.pe/wp-content/uploads/2015/05/separata_libres_de_violencia_vcm.pdf)
46. DEL CARPIO, Columba (20016) Nueva norma implica otorgar recursos al Poder Judicial. Ley y protección para la mujer (consulta: 3 de abril de 2018). (<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ca5e40804bf558d48946b91dbfcbea8d/Ley+y+protecci%C3%B3n+para+la+mujer.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ca5e40804bf558d48946b91dbfcbea8d>)
47. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2010) Prevención de la violencia sexual y violencia infligida por la pareja contra las mujeres. Qué hacer y cómo obtener evidencias (consulta: 15 de enero de 2018). (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44810/9789275316351_spa.pdf?sequence=1)
48. CHANJAN, Rafael (2016) Derecho penal, violencia de género y feminicidio. Análisis de la normativa peruana a partir de la experiencia española (consulta: 18 de marzo de 2018). (<https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/51190/derecho%20penal.pdf?sequence=1>)
49. BARDALES, Olga (2017) Consecuencias de la violencia contra las mujeres (consulta: 14 de julio de 2017). (<https://repositoriopncvfs.pe/producto/4779/>)
50. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2012) Derecho a la salud de las mujeres víctimas de violencia: Supervisión de establecimientos de salud en Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puna (consulta: 16 de julio de 2017). (http://www.paho.org/per/images/stories/FtPage/2012/20120827_violencia_mujeres_defensoria.pdf?ua=1)
51. BELTRÁN, Cecilia (2014) Políticas públicas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: análisis de viabilidad de diecisiete planes regionales de igualdad de oportunidades en el Perú, en el periodo 2006-2010 (consulta: 5 de febrero de 2018). (<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/12539-49867-1-PB.pdf>)
52. HUERTA, Rosa y otros (2014) Depresión y ansiedad en mujeres en situación de maltrato en la relación de pareja según tipo de convivencia, en zonas urbano-marginales de la ciudad de Lima (consulta: 5 de febrero de 2018). (<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/11945-41647-1-PB.pdf>)

53. TRELLES, Juan (2006) Violencia basada en género (consulta: 5 de agosto de 2017).
(http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/ginecologia/vol52_n1/pdf/A02V52N1.pdf)
54. REVISTA DE ESTUDIO DE JUVENTUD (2009) Juventud y violencia de género (consulta: 6 de agosto de 2017).
(https://issuu.com/injuve/docs/revista_86_completa)
55. PINTO, Nélica (2006) Repercusiones de la violencia basada en género sobre la salud de las mujeres (consulta: 21 de enero de 2018).
(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol52_n1/pdf/A03V52N1.pdf)
56. NERIA, Yessica (2016) Violencia contra la mujer y la responsabilidad del Estado (consulta: 19 de septiembre de 2017).
(<http://www.revistagobiernoydegestionpublica.com/index.php/REVIGGP/article/view/32>)
57. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2013) Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Consecuencias para la salud (consulta: 16 de febrero de 2018).
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98862/WHO_RHR_12.43_spa.pdf?sequence=1)
58. AÑINO, Sara (2005) Violencia contra las mujeres: causas, consecuencias y propuestas (consulta: 1 de febrero de 2018).
(<https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/violencia%20contra%20la%20mujeres.pdf>)
59. MOSCOSO, Valeria y otros (2012) Violencia contra las Mujeres en el Estado de México (consulta: 2 de enero de 2018). (<http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-violencia-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-mexico.pdf>)
60. CÁCERES, William (2014) Legislación sobre la violencia contra la mujer en el entorno familiar en el Perú (consulta: 8 de enero de 2018).
([http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C07B3C9044FE261E05257DF600015409/\\$FILE/INFINVES94-2014-2015.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C07B3C9044FE261E05257DF600015409/$FILE/INFINVES94-2014-2015.pdf))
61. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2002) Informe mundial sobre la violencia y la salud (consulta: 1 de diciembre de 2018).

- (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;jsessionid=47888D2D5F3882987FAC51D133AF0305?sequence=1)
62. CRISÓSTOMO, Mercedes (2016) Violencia contra las mujeres rurales: Una etnografía del Estado Peruano (consulta: 29 de septiembre de 2017). (http://cisepa.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2016/06/Mercedes-Cris%C3%B3stomo_-1.pdf)
63. DÍAZ, Ramón y MIRANDA, Juan José (2010) Aproximación del costo económico y determinantes de la violencia doméstica en el Perú (consulta: 3 de octubre de 2017). (http://cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/08-diaz_miranda.pdf)
64. AIQUIPA, Jesús (2015) Dependencia emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja (consulta: 12 de febrero de 2018). (http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472015000200007)
65. UNICEF (2015) Niñez y Adolescencia, presente y futuro (consulta: 21 de noviembre de 2017). (<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/Ni%C3%B1ez%20y%20adolescencia%252c%20presente%20y%20futuro%20informe%202015%20Per%C3%BA.pdf>)
66. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) (2007) (<https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf>) (consulta: 15 de marzo del 2018)
67. GRANADOS, Vila y JIMÉNEZ, Rodrigo (2008) Guía Práctica para el Otorgamiento de las Medidas de Protección para personas en condición de discapacidad y personas adultas mayores (consulta: 12 de mayo del 2018). ([file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/GuiaOtorgamientoMedidasProteccion%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/GuiaOtorgamientoMedidasProteccion%20(1).pdf))
68. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) (2007) (https://www.cidh.oas.org/women/acceso07/cap1.htm#_ftn35) (consulta: 3 de mayo del 2018).
69. SUMARIA, Omar (2009) El Sistema de la Tutela Jurisdiccional: La disputa por la construcción de un modelo procesal en América Latina (consulta: 5 de mayo del 2018). (<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/2085-8070-1-PB.pdf>)

ANEXOS

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada (o) señor (a)

Mi nombre es Natalia Gema Somocurcio Sologuren, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima. Quisiera informarle brevemente que me encuentro realizando un estudio sobre protección jurídica de la mujer que denuncia violencia en el ámbito familiar, en el distrito Tacna.

Al ser usted una persona clave para el estudio, requerimos de su apoyo voluntario, para que nos brinde una entrevista en profundidad que durará aproximadamente sesenta minutos, a fin de recoger información cualitativa sobre este hecho en particular.

Es importante para nuestra investigación conocer a profundidad el tema objeto de estudio, a fin que se pueda mejorar la comprensión de este tema, por lo que le agradeceremos mucho, contestar cada una de las preguntas con total veracidad.

Son consideraciones éticas del estudio, el mantener en absoluta reserva la identidad del informante y toda la información que nos brinde servirá únicamente para los fines de la investigación.

En consecuencia, después de haber informada (o) sobre los objetivos y lo que se me solicita, acepto contribuir con esta causa.

.....FIRMA

ANEXO 2

GUÍA DE ENTREVISTA A OPERADORES DE JUSTICIA/ ORGANISMOS DEL ESTADO

DATOS DEL ENTREVISTADO

Institución en la que labora

Dependencia

Nombre del entrevistado

Cargo que ocupa

Año en que asumió este cargo

Tiempo de servicio

Sexo

Edad

ASPECTOS A SER INDAGADOS

Conocimientos que manejan en el tema

¿En qué consiste su trabajo? (Acciones desde su cargo)

¿Tiene formación especializada en el tema de violencia contra la mujer? ¿Qué tipo de formación? (especificar)

¿Qué carencias desde el punto de vista de la infraestructura tiene en su institución para atender a la mujer que denuncia violencia?

¿Se respetan el debido proceso y el tiempo frente a las denuncias por violencia contra la mujer?

¿Qué otras dificultades encuentra usted para la atención de las denuncias de violencia contra la mujer?

¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Violencia N° 30364? ¿Qué debilidades encuentra?
¿Qué propone respecto a las mismas?

ANEXO 3

GUÍA DE ENTREVISTA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Nombre o Seudónimo

Edad

Estado Civil

Tiempo de convivencia

Grado de Instrucción

Ocupación

Lugar de procedencia

Religión:

Idiomas:

Número de hijos

Vivienda

FAMILIA:

Numero de hermanos

Padres:

Otros familiares

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

¿Qué tipo de violencia ha sufrido durante su relación de pareja?

¿Cómo la agrede su pareja? Explique

¿En qué circunstancias la agrede? Relate

¿Con qué frecuencia se produce?

¿Ha puesto en riesgo su vida o integridad? Comente

¿Qué hizo frente a estos hechos de violencia?

¿Denunció? ¿Por qué? (razones económicas, emotivas, de salud, etc.)

TIPO DE VIOLENCIA QUE DENUNCIA LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

¿Qué tipo de violencia ha denunciado? ¿Cuántas veces?

¿Cómo ha culminado su denuncia? (seguimiento y sentencia)

ASPECTOS SUBJETIVOS ENTERSUBJETIVOS

Razones

¿Qué motivos tuvo para denunciar la ocurrencia de violencia?

¿El agresor la mantenía bajo amenaza si lo denunciaba? ¿Cómo enfrentaría esa situación?

Según su punto de vista: ¿qué podría animar a las personas que padecen violencia en la relación de pareja a asistir a los servicios públicos o a las ONGs involucradas en la lucha contra la violencia? ¿Y a involucrarse en actividades de prevención? ¿De atención? Y ¿de apoyo?

Percepciones

¿Qué clase de dificultades cree usted que encuentran las mujeres para denunciar la violencia que padecen en su hogar? (Indagar en el ámbito personal, familiar e institucional)

¿Qué piensa de la mujer que vive con una pareja violenta? ¿Ha cambiado su percepción desde que tomó conciencia de su problema y lo denunció?

¿Qué cree que piensan los demás acerca de las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja?

Actitudes

¿Cómo se sentía luego que era objeto de una agresión por parte de su pareja? ¿Buscó algún tipo de ayuda? ¿Cómo se sintió luego de la atención? ¿Mejoró su ánimo?

¿Qué opina acerca del maltrato que reciben las mujeres de parte de su pareja?

¿Puede hablar de su situación de forma abierta con todos los que la rodean o solo con ciertas personas?

¿Qué la hizo cambiar de parecer y denunciar esta vez?

¿Siente que la decisión tomada fue la más acertada? ¿Por qué?

PERCEPCION DE LA RESPUESTA DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA/ORGANISMOS DEL ESTADO

¿Antes de la agresión conocía sobre los servicios de protección del Estado para la atención de violencia intrafamiliar? Nómbrelos

¿Acudió a los servicios de protección del Estado buscando apoyo para su problema de violencia?:

Respuesta afirmativa: ¿Qué tipo de apoyo recibió?

Respuesta negativa: ¿Por qué no recurrió a ninguno?

¿Cómo se sintió luego de la atención?

¿Qué dificultades ha tenido durante el proceso iniciado hasta su culminación (de denuncia), ante las autoridades?

¿En qué lugar o ante qué autoridades ha realizado su denuncia sobre violencia? Explicar cuál fue la ruta que siguió su denuncia.

fue la ruta que siguió su denuncia.

ANEXO 4

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEGÚN LUGAR DE DENUNCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 01

Elaboración propia

ANEXO 5

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN EDAD DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 02

Elaboración propia

ANEXO 6

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN PERIODICIDAD DE LA AGRESIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 03

Elaboración propia

ANEXO 7

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 04

Elaboración propia

ANEXO 8

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 05

Elaboración propia

ANEXO 9

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN MOTIVO DE LA AGRESIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 06

Elaboración propia

ANEXO 10

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN PARENTESCO CON EL (LA) AGRESOR (A) DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 07

Elaboración propia

ANEXO 11

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN CONDICIÓN ANÍMICA DEL AGRESOR DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 08

Elaboración propia

ANEXO 12

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGÚN OCUPACIÓN DEL AGRESOR DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, POLICIA NACIONAL DEL PERÚ-TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Gráfico 10

Elaboración propia

ANEXO 13

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA DENUNCIADA, PODER JUDICIAL TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

ANEXO 14

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEGÚN RELACIÓN CON EL AGRESOR, PODER JUDICIAL TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 12

Elaboración propia

ANEXO 15

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA Y RELACIÓN CON SU AGRESOR, PODER JUDICIAL TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Poder Judicial, Abril 2017

Elaboración propia

ANEXO 16

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, SEGÚN DÍAS DE DEMORA PARA RECIBIR MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PODER JUDICIAL TACNA, ENERO – JULIO 2016.

Fuente: Tabla 15

Elaboración propia